# Cambiando todo para no cambiar nada.

# Las reformas en el proceso penal bonaerense

## Pablo Ciocchini

## Resumen

Este trabajo describe y analiza la relevancia de los cambios sufridos por la administración de justicia penal bonaerense en los últimos años. Particularmente, se focaliza en el uso de la demora judicial como movilizador de los cambios organizacionales. Se sostiene que a pesar de las resistencias sufridas, estos cambios han sido verdaderamente profundos. Han modificado prácticas diarias. Sin embargo, el resultado no es fundamentalmente diferente: se evitan los debates orales y se procesan casos de baja complejidad.

La primera parte del artículo describe cómo los discursos reformistas técnicos y gubernamentales moldearon la discusión sobre la reforma judicial en el ámbito penal alrededor de la necesidad de erradicar la demora judicial.

La segunda parte explora en base al trabajo de campo realizado el impacto de estas reformas en el desarrollo de los juicios orales.

## Introducción

En 1998 se implementó en la Provincia de Buenos Aires (PBA) un nuevo Código de Procedimientos Penales (CPP).

Se remplazaba así al viejo CPP, llamado Código Joffre en referencia a su autor, que contaba con casi cien años de antigüedad. Los promotores de las reformas sostenían que el nuevo CPP, basado en un sistema acusatorio o adversarial en oposición al tradicional inquisitorio, era más afín a los valores y necesidades de una sociedad democrática (Maier & Binder, 1989). [[1]](#footnote-1)

Este nuevo CPP promovía la oralidad en los procedimientos, en especial, durante la fase previa al juicio, es decir, la investigación del caso.

En el Código Joffre la investigación estaba a cargo del juez de instrucción, pero el nuevo CPP removía esa figura y ponía la investigación en cabeza del fiscal. El rol del juez era redefinido, de activo investigador a encargado de garantizar la legalidad de las actuaciones del fiscal.

La reforma del CPP se promovió como un avance hacia un procedimiento más eficiente, que fuera más respetuoso de los DDHH (*Fundamentos de la ley nº 11.922*, 1996). A pesar de que estos dos objetivos responden a lógicas diferentes, la eficiencia busca el mejor aprovechamiento de los recursos existentes, mientras que el respeto de los DDHH se relaciona con garantizar las condiciones necesarias para el respeto de la dignidad humana: el discurso reformador, tanto el técnico como el gubernamental, los superpusieron. La implementación del juicio abreviado en el nuevo CPP evidencia que lejos de ser fácilmente reconciliables, estas lógicas tienden a enfrentarse.

La eficiencia de los procedimientos fue interpretada por estos discursos desde un criterio temporal como reducción del tiempo requerido para resolver el caso. Esta reducción fue expresada en tanto objetivo político como erradicación de la demora judicial.

A su vez, esta demora judicial fue asociada tanto a la impunidad de los delincuentes como a la violación de los DDHH de los detenidos. Por una parte, se la asoció con la impunidad porque se sostuvo que la demora judicial producía la prescripción de las causas penales antes de que se alcanzara la sentencia condenatoria. Por otra parte, se sostuvo que la demora judicial era la causante del altísimo número de detenidos sin sentencia firme. Más del 80% de las personas encarceladas en la PBA al momento de entrar en vigencia el nuevo CPP se encontraban bajo el régimen de prisión preventiva, es decir, sin sentencia condenatoria o sin que ésta estuviese firme (Kostenwein, 2015: 154). De esta forma, se imputó a la demora judicial la superpoblación carcelaria, producto, según este discurso, de la acumulación de detenidos sin condena.

Mediante estas asociaciones se sostuvo que el discurso eficiencista o gerencial era compatible, e incluso necesario, con el respeto de los DDHH. El consenso construido alrededor de este último facilitó de esta manera la aceptación de las reformas en el ámbito político y judicial.

Este consenso permitió que el CPP fuera modificado numerosas veces desde su puesta en vigencia. Sin embargo, las reformas más significativas que sufrió respecto de la reorganización de la economía política del proceso ocurrieron entre los años 2004 y 2008. Fue en este período cuando se introdujo el principio de oportunidad reglado para los fiscales, el procedimiento simplificado para los delitos flagrantes, el sistema de audiencias tempranas multipropósito para el tratamiento de estos delitos y por último reformas en la organización de los tribunales criminales y el tribunal de casación penal.

A continuación, se reconstruye el proceso a través del cual los discursos gubernamentales y técnicos impusieron la asociación entre el respeto a los derechos humanos y la erradicación de la demora judicial. Esta asociación fue fundamental para vencer las resistencias al discurso gerencial dentro de la institución judicial.

En la segunda parte, se exploran, a través del trabajo etnográfico, las prácticas resultantes de dichas reformas. En particular, el análisis se focaliza en la denominada etapa de juicio. Se busca por una parte contrastar las prácticas diarias con lo sostenido por los discursos reformistas y por la otra comprender la racionalidad de estas prácticas.

## Primera parte: Construyendo el problema y sus soluciones

Para comprender el consenso que han tenido los cambios sufridos por la administración de justicia penal bonaerense en las últimas tres décadas es necesario remontarse a la transición democrática en los años ochenta.

Al poco tiempo del retorno al régimen democrático, en 1987, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para un nuevo Código Procesal Penal de la Nación (de ahora en adelante CPPN). Sin embargo, la oposición en el Congreso frustró dicho intento (Clariá Olmedo, 1998: 131-132). En 1990, un nuevo Gobierno elegido el año anterior, insistió en la reforma del CPPN. En los debates en el Congreso Nacional sobre la reforma, que se realizaron entre agosto de 1990 y julio de 1991, la discusión giró en torno a la necesidad de sustituir el antiguo CPPN debido a su carácter inquisitivo por otro código de procedimientos con base acusatoria.

El análisis de estos debates muestra cómo la demora judicial se impuso en el discurso gubernamental como la problemática clave a resolver en la administración de justicia penal (*Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación*, 1990a: 2548, 2550).[[2]](#footnote-2)

Estos discursos gubernamentales se basaban en lo que los discursos técnicos reformistas expresados por académicos locales y regionales venían sosteniendo desde hacía décadas: la demora judicial era un problema causado por el sistema procesal inquisitivo imperante (Clariá Olmedo, 1998: 115-116; Espada & Irisarri, 1998: 257; Struensee & Maier, 2000: 20; Zaffaroni, Slokar & Alagia, 2003: 166). Estos discursos técnicos sostenían que el juicio oral, y en términos más generales los sistemas procesales acusatorios, erradicarían las prácticas burocráticas y la demora judicial (Binder, 2003: 15). El énfasis estaba en el reemplazo de los procedimientos escritos y el expediente judicial como símbolo de dichos procedimientos por procedimientos informales basados en audiencias orales.

En base al tratamiento que dichos discursos técnicos reformistas daban a la problemática, la primera respuesta que dio el discurso gubernamental a la demora judicial fue introducir juicios orales y públicos para reemplazar los juicios escritos (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación*, 1991b: 1624; *Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación*, 1990a: 2553, 2556, 2892, 3039; *Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación*, 1990b: 2522, 2528, 2529, 2531).

Estos primeros abordajes se caracterizaron por el exceso de confianza en la introducción del juicio oral y público para reducir la demora judicial. Cuatro años más tarde esta misma idea llevaría al gobierno de la PBA a reformar el CPP para introducir los juicios orales, incluso a pesar de la persistencia de la demora judicial en la justicia penal federal años después de la reforma del CPPN. [[3]](#footnote-3)

El argumento central en estos debates era que los ciudadanos habían perdido confianza en la administración de justicia penal debido a la ineficiencia que la demora judicial hacía visible (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,* 1991b: 1634; *Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,* 1990a: 2548; *Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,* 1990b: 2524, 2525). Esta pérdida de confianza causada por la ineficiencia era señalada por el discurso gubernamental desde dos perspectivas opuestas. Por un lado, el discurso gubernamental señalaba que la ineficiencia de la administración de justicia penal violaba los derechos de los acusados detenidos a la espera de ser juzgados y, por otro lado, señalaba que la ineficiencia en el castigo de los criminales afectaba la confianza de los ciudadanos que reclamaban una intervención que erradicara la inseguridad imperante. Esta capacidad del discurso gubernamental para articular estas dos perspectivas sobre la demora judicial permitió movilizar alrededor de este problema tanto a sectores defensores de los derechos humanos o garantistas, como a partidarios de las políticas de mano dura.

En primer lugar, como fuera señalado previamente, el discurso gubernamental presentó la demora judicial como causa de la violación de los derechos de los acusados detenidos que están a la espera de ser juzgados, y como consecuencia de esto, la superpoblación de las cárceles (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación*, 1991a: 1670; *Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación*, 1990a: 2552). De este modo, el discurso gubernamental desplazó el debate del problema de la amplitud en la aplicación y extensión de la prisión preventiva por el debate de la demora judicial como violación del plazo razonable del proceso.

De esta forma, la amplitud en la aplicación de la prisión preventiva quedó completamente fuera del debate parlamentario. Las palabras del senador Jiménez Montilla ejemplifican cómo se operó este desplazamiento. Al argumentar a favor del nuevo CPPN, dijo:

…esta iniciativa [la reforma del CPPN] […] [basará] el sistema sobre la oralidad de los juicios y esto admite una celeridad en los trámites [penales]. Asimismo, da la posibilidad de evitar la sobrepoblación carcelaria en demasía, como ocurre en estos tiempos y las famosas acumulaciones de procesos donde, a veces, se llega a un momento tal en que los jueces dejan causas abandonadas en los cajones ante la imposibilidad de dictar el fallo (*Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación*, 1990b: 2522).

En la misma línea, el senador Benítez expresó que la introducción de juicios orales públicos iba a resultar en un “ahorro significativo [para el Estado] […] con la disminución de la privación de libertad a los procesados que, mantenidos por el Estado, permanecen en prisión durante años, mientras se tramita el juicio escrito...” (*Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación*, 1990b: 2530).[[4]](#footnote-4)

Operado este desplazamiento que redujo el problema de la desmedida extensión de los períodos en prisión preventiva a un problema de celeridad procesal, el discurso gubernamental presentó el debate sobre la eficacia procesal como una cuestión de derechos humanos. Es decir, al señalar la demora como única causa de la violación de los derechos humanos de los detenidos a la espera de ser juzgados (derechos reconocidos por la CADH ratificada por la Argentina),[[5]](#footnote-5) el debate sobre las reformas para reducir la demora judicial fue presentado como un programa de defensa de derechos humanos. De esta forma, en los debates sobre la reforma del CPPN, el senador Benítez sostuvo que la necesidad de aprobar un nuevo CPPN surgía de los pactos de derechos humanos ratificados por la República Argentina: “el Estado está comprometido, al haber firmado la Convención [Americana] de los Derechos Humanos en Costa Rica, a asegurar a los encarcelados que serán juzgados en plazos razonables” (*Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación,* 1990b: 2531).[[6]](#footnote-6)

En segundo lugar, desde una perspectiva opuesta a la descripta, un grupo de legisladores afirmaban que los ciudadanos estaban sufriendo un incremento exponencial de la delincuencia y que demandaban una administración de justicia penal más eficaz y severa (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,* 1991: 1632, 1633).[[7]](#footnote-7) Estos legisladores consideraban la demora judicial como fuente de inseguridad, ya que provocaba la prescripción de las causas penales antes de llegar a una sentencia condenatoria y en consecuencia provocaba impunidad (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,* 1991b: 1631; *Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación,* 1990a: 2550; *Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación,* 1990: 2522, 2525).

Un ejemplo ilustrativo del discurso que sostenían son las palabras del diputado López Arias que, al argumentar en contra de la demanda punitivista que circulaba en los medios de comunicación masiva, dijo:

…el problema no radica tanto en las penas sino en que en la Argentina las sentencias nunca se aplican por falta de medios del Poder Judicial, por defectos de nuestro código procesal o por las mismas características de nuestra sociedad. En consecuencia, el problema no está centrado en la gravedad de las penas sino en que éstas nunca llegan a aplicarse porque la justicia presenta una morosidad secular (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,* 1991b: 1625).

En los años posteriores, estas dos líneas discursivas sobre la demora judicial reaparecieron en la discusión sobre la introducción de la suspensión del juicio a prueba, versión local de la *probation* norteamericana[[8]](#footnote-8) y la ley del “dos por uno”[[9]](#footnote-9). Sin embargo, la diferencia fue el contexto en que estas leyes fueron debatidas. Desde 1992 a 1994 estallaron en la Argentina motines cada vez más violentos en las cárceles como consecuencia de la sobrepoblación de las mismas: allí más de la mitad de los presos estaba cumpliendo prisión preventiva (*Dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Derechos y Garantías de la Cámara de Senadores de la Nación*, 1994). En consecuencia, ambas leyes fueron objeto de debate bajo la presión de un “anónimo ejército de procesados sin condena” (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,* 1993: 1324). Las palabras del diputado Durañona y Vedia muestran las condiciones bajo las cuales se originaron esas leyes:

No se puede negar que la coyuntura influye lamentablemente sobre el modo de plantearse esta discusión en el seno de la Honorable Cámara. [...] En las cárceles de la República Argentina se están viviendo situaciones que han provocado el afán del poder administrador –responsable de ese régimen– de descomprimirlas. Por lo tanto, hay conversaciones –no me interesa llamarlas “negociaciones”– y existen condiciones que han motivado una expectativa en esos lugares [las cárceles] de conmoción en torno de la consideración de este proyecto de ley [la ley del “dos por uno”] (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,* 1994: 2658).

Ambas leyes apuntaron a la reducción de la población en las cárceles: la suspensión de juicio a prueba (al evitar el encarcelamiento) y la ley del “dos por uno” (al reducir las penas compensando las detenciones preventivas prolongadas). Sin embargo, en el debate en el Congreso Nacional se sostuvo que la demora judicial era la razón principal de estas leyes. En este mismo sentido el “Mensaje del Poder Ejecutivo” que acompañó el proyecto de ley para introducir la suspensión de juicio a prueba dirigido al Congreso de la Nación afirmaba que se trataba de una “moderna técnica de control de gestión […] [que] permitirá obtener un rendimiento mejor que el observado hoy por la sociedad” (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,* 1993: 1290).[[10]](#footnote-10)

Los legisladores en el debate de la ley del “dos por uno” se expresaron de la misma manera: “esta amplitud temporal de la prisión preventiva también reconoce su génesis en los obsoletos sistemas procesales que han regido hasta estos días en toda Latinoamérica, posibilitando dilatados procesos que exceden a todas luces el margen de lo razonable” (*Dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Derechos y Garantías de la Cámara de Senadores de la Nación*, 1994).

El senador Alasino al intervenir en el debate de la ley del “dos por uno” sostuvo que dicha ley: “tiene relación, obviamente, con la duración de los procesos criminales. Con esto se intenta evitar demoras de cuatro, cinco, seis, siete y hasta ocho años”(*Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación,* 1994: 2269).

Un ejemplo de cómo el debate sobre la amplitud en la aplicación de la prisión preventiva fue absorbido por completo por el debate sobre la demora judicial fue la declaración del senador Molina en el debate de la ley del “dos por uno” cuando se enfrentó al reclamo del senador de la Rúa, en aquel entonces líder de la oposición en el Senado. De La Rúa exigió la necesidad de un análisis más profundo de las condiciones que producen demora judicial en lugar de limitar el plazo de la prisión preventiva y ofrecer mecanismos compensatorios cuando se exceda dicho plazo. El senador Molina, del oficialismo, respondió que: “lo real y cierto es que tenemos una excesiva población carcelaria. Por lo tanto, habrá que fijarle un plazo a los jueces para dictar sentencia” (*Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación,* 1994: 2272). Sin embargo, no estaban legislando un límite para la duración de los procesos penales, sino para la duración de la prisión preventiva. Molina había caído plenamente en el mecanismo de confusión de las problemáticas que el discurso gubernamental había desarrollado desde los debates de la reforma del CPPN.

Con la “fusión” de la duración de los procesos penales y de la prisión preventiva en el debate de la ley del “dos por uno”, ambos fenómenos fueron introducidos como violaciones a los derechos humanos. Todos los informes presentados en el debate de la ley en el Congreso Nacional –realizados por el Poder Ejecutivo (*Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación,* 1993: 5417-5418), el Comité de la Cámara de Diputados (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,* 1994: 2652) y el Comité de Cámara de Senadores (*Dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Derechos y Garantías de la Cámara de Senadores de la Nación*, 1994)– implícita o explícitamente presentaban esta “fusión”. Aún más, todos estos informes declaraban expresamente que la ley del “dos por uno” estaba dirigida a implementar la CADH. Finalmente, la ley del “dos por uno” terminó conteniendo una disposición (artículo 9° ley 24.390) que expresamente declaraba que el objeto de la ley era cumplir con el artículo 7.5 de la CADH.

Si bien estos debates tuvieron lugar en el Congreso Nacional, también tuvieron un impacto directo a nivel provincial. Esto se debió a que ambas leyes (la suspensión de juicio a prueba y la ley del “dos por uno”) reformaron el CP que tiene validez en todo el país.

Años más tarde, se repetiría en la PBA este debate sobre la demora judicial en términos similares. La demora judicial fue abordada por el discurso gubernamental bonaerense siguiendo las mismas líneas argumentativas del discurso gubernamental nacional. Este discurso provincial justificó reiteradas reformas de la administración de justicia penal bonaerense.

## La demora judicial en el discurso gubernamental bonaerense

La demora judicial emergió en el discurso gubernamental bonaerense directamente relacionada con el problema de la sobrepoblación de las cárceles, repitiendo en parte lo ocurrido a nivel federal. La gran diferencia fue el tratamiento que el discurso gubernamental provincial sobre la demora judicial le dio al problema de la sobrepoblación carcelaria. El discurso provincial presentó la superpoblación carcelaria como un problema de seguridad pública, es decir, como un potencial desborde, en lugar de centrarse en la violación de los derechos de los detenidos a la espera de ser juzgados.

En 1996 estalló un violento motín en la cárcel de Sierra Chica en la PBA. Las negociaciones con los presos conducidas por la Subsecretaria de Justicia de la PBA de aquel entonces, María del Carmen Falbo, duraron ocho días. Después de controlar el motín, Falbo declaró que una de las demandas clave de los prisioneros era la reducción del tiempo que tenían que esperar en prisión preventiva antes de ser juzgados. En la misma declaración anunció que su oficina había estado trabajando en un proyecto para un nuevo CPP que resolvería el problema de la demora judicial (Delfino, 1996). El proyecto al que la Subsecretaria de Justicia se refería se presentó para su debate en el Congreso Provincial unos meses más tarde. En los debates parlamentarios sobre la reforma del CPP el senador Román señaló la importancia de la demora judicial:

… la Justicia no es justicia si no falla pronto, rápido. Pero éste no es un problema de este Gobierno, sino de todos los Gobiernos que vienen desde atrás. Y la Justicia no es tal si a ese procesado no le damos un mínimo de garantías, porque hasta que no sea penado o hasta que no sea condenado, es inocente... (*Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires*, 1996: 3238).

En los fundamentos del nuevo CPP se puede observar que si bien se mantenía la necesidad de reemplazar el sistema inquisitorial por uno acusatorio, se entendía que dicho cambio no sólo incluía el reemplazo del juicio escrito por el juicio oral sino también el paso a un sistema adversarial, con las figuras del fiscal acusador y el juez bien diferenciadas (*Fundamentos de la ley nº 11.922*, 1996). Junto con esta acentuación de lo adversarial se introdujo el juicio abreviado, una adaptación del *plea bargaining* norteamericano para reducir la carga de trabajo del sistema procesal y por lo tanto la demora que ésta causa. El nuevo CPP fue aprobado en 1996 pero no se puso en práctica hasta finales del año 1998.

La demora judicial emergió nuevamente en el debate público sobre la sobrepoblación de las cárceles en julio de 2000 cuando el defensor general anunció que formularía una petición contra su propio Estado provincial ante la CIDH por tener 700 detenidos en espera de juicio durante un período de cinco a siete años. La situación se agravó aún más porque un grupo de estos detenidos fue informado por los tribunales encargados de juzgarlos que tendrían que esperar al menos dos años más para la realización de sus juicios. Este incidente no fue aislado ni desconocido por el gobierno provincial. Por el contrario, a finales de ese mismo año, el Ministro de Justicia de la PBA, Jorge Casanovas, señaló en una entrevista de prensa que la demora judicial era una de las principales causas del incremento de la población carcelaria (Oliva, 2000).

La sobrepoblación de las cárceles se mantuvo a través de los años en el centro del debate público. Más allá de que el discurso gubernamental provincial sostuvo en algunos casos que el incremento exponencial de la población carcelaria era resultado de la mayor eficacia policial en la detención de los delincuentes (Casanovas, 2001) o por el contrario simplemente del endurecimiento del régimen de detención preventiva (“Vuelven a proponer la excarcelación de presos por delitos ‘menores’”, 2002), siempre se hacía referencia a estos fenómenos en un contexto de demora judicial (“Divide a la Legislatura la idea de favorecer las excarcelaciones”, 2002; “La Corte estudia la situación carcelaria”, 2005; “Tironeos en el Gobierno por alojamiento de presos”, 2004). Es decir, la demora judicial se presentaba en el discurso gubernamental provincial como un fenómeno omnipresente que desvirtuaba cualquier otra medida y que reconducía siempre a la superpoblación carcelaria.

La superpoblación carcelaria provocó un nuevo incidente político en mayo de 2005 cuando la CSJN dictaminó en una sentencia que el Gobierno de la PBA debía trasladar a todos los detenidos en prisión preventiva que se hallaran en comisarías a unidades penitenciarias. La sobrepoblación en las cárceles había llevado a ubicar a casi 6.000 presos en comisarías en condiciones extremas. El Gobierno provincial insistió en su discurso de deslindar responsabilidad acerca de la superpoblación al explicarla como resultado de la demora judicial y esta, a su vez, como un problema de la administración de justicia. De esta forma, el ministro de justicia de la Provincia al comentar la decisión de la CSJN declaró que el gobierno provincial estaba conforme porque: “el fallo viene a ratificar una voluntad del Gobierno: la de acelerar los procesos, solucionar el hacinamiento y poner en marcha una reforma en la legislación penal” (“Solá pide que se haga un congreso de magistrados”, 2005).

Pero ni la demora judicial ni la sobrepoblación de las cárceles se redujeron, y dos años más tarde, en marzo de 2007, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, durante su campaña por otra reforma del CPP, declaró que: “la Justicia penal debe ser más veloz […] [porque] hay muchas personas privadas de su libertad sometidas a procesos sin definición” (“Convocarían a una consulta popular para definir la reforma penal”, 2007). Ese mismo año, meses después, tanto el discurso gubernamental como el discurso del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una conocida ONG local defensora de derechos humanos, coincidían en acusar a la demora judicial por la superpoblación carcelaria. En esa ocasión el informe del CELS presentado a la CSJN señalaba que los detenidos “continúan padeciendo condiciones infrahumanas de detención y son víctimas de la demora judicial para la resolución de sus causas” (“Mejoró pero aún es crítica la situación de los presos”, 2007). A su vez, el ministro de justicia de la PBA, Eduardo Di Rocco, comentando el informe presentado declaraba que:

…se habla de efectos y no de causas […] no se habla [de] que el problema institucional analizado deriva de la mora judicial. […] [E]sta mora, este retroceso judicial, es lo que hace que se siga utilizando la prisión preventiva como un medio correctivo social (“Mejoró pero aún es crítica la situación de los presos”, 2007).

Por otra parte, el discurso gubernamental provincial también utilizó la demora judicial para explicar la creciente inseguridad. Este discurso gubernamental señaló la ineficiencia de la justicia penal en el castigo de los criminales como causa de la sensación de inseguridad:

…[las] deficiencias se materializan, entre otros aspectos, en el congestionamiento de causas, la lentitud del trámite en los procesos, y la consecuente dilación en el dictado de las sentencias. Las derivaciones negativas de estos desfasajes se propagan en cadena resintiendo la eficacia del sistema todo, generando en la población bonaerense una desalentadora sensación de inseguridad e injusticia, instalando en la opinión pública la idea de que la demora en el juzgamiento se traduce en impunidad. (*Fundamentos de la ley nº 11.922*, 1996).

En este mismo sentido, el senador provincial oficialista Díaz Bancalari igualaba demora e ineficiencia policial y ambos en relación con la inseguridad en la sesión previa al debate del nuevo CPP: “¿Vamos a seguir gritando contra la justicia lerda o contra la policía corrupta?”(*Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires*, 1996: 3246).

Durante los primeros años en vigencia del nuevo CPP, frente a la creciente demora judicial a pesar del nuevo código, el discurso gubernamental provincial culpó por esta persistencia de la demora a la ley 24.390, conocida como del “dos por uno”, de origen nacional. El argumento de este discurso era que la ley del “dos por uno” incentivaba a los acusados a apelar las decisiones de los jueces y de esta forma se incrementaba exponencialmente la carga de trabajo de la totalidad del sistema judicial, lo que resultaba en demora judicial.

Así, en octubre de 2000, el ministro de justicia de la PBA Jorge Casanovas apoyó la demanda del gobernador bonaerense Carlos Ruckauf para derogar la ley del “dos por uno” al denunciar que 7.000 detenidos serían liberados gracias a esa ley. El ministro no señaló la morosidad como causa de esa situación, pero surgía del conflicto, ya que el problema de esos 7.000 presos era que habían cumplido más de tres años detenidos sin sentencia firme. Para el ministro “con la derogación del ‘dos por uno’ esto va a terminar, porque mucha gente se conformaría con su sentencia, no recurriría y tendríamos un porcentaje mayor de condenados” (“El dos por uno dejaría libres a 8 mil presos”, 2000).

Luego de la derogación de la ley del “dos por uno” en mayo del 2001 el discurso gubernamental provincial siguió trayendo la problemática de la demora para explicar la inseguridad. Así, en julio de 2003, el gobernador bonaerense Felipe Solá relacionó en su discurso seguridad con celeridad en la administración de justicia penal: “es una situación de excepcionalidad, de mayor demanda de la gente por mayor seguridad, mayor celeridad de la Justicia, mayor presencia de fiscales de mayor cantidad de penalizaciones” (Morosi, 2003).

Un año más tarde, en abril de 2004, un empresario llamado Blumberg que se había convertido en una figura pública después de que su hijo fuera secuestrado y asesinado, encabezó una marcha en la que participaron 150.000 personas pidiendo más seguridad. Blumberg exigía medidas tales como penas más severas para los delincuentes y más poder para la policía. El petitorio de siete puntos de Blumberg concluía diciendo que “todas las medidas requieren también una verdadera reforma del sistema judicial a los efectos de obtener una Justicia rápida, efectiva y con jueces idóneos para garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho” (“Los siete puntos del petitorio”, 2004). El gobernador bonaerense Felipe Solá respondió al reclamo enviando un proyecto de reforma del CPP al Congreso Provincial. En palabras del gobernador las nuevas medidas estaban: “destinadas, básicamente, a agilizar procesos, obtener condenas más rápidamente y dificultar liberaciones” (Sagasti, 2004). Por otra parte, a partir de ese mismo año el presupuesto del Poder Judicial comenzó un incremento sostenido a lo largo de los sucesivos años. En el período que va del año 2004 al 2010 el presupuesto del Poder Judicial aumentó un 444% (“Evolución del presupuesto – Provincia de Buenos Aires”, 2011).

Sin embargo, a pesar de dichas reformas y del incremento presupuestario, la problemática de la inseguridad se mantuvo y la demora siguió siendo su explicación en el discurso gubernamental. El gobernador bonaerense, después de cinco años en el cargo, expresaba que el problema era que “la propensión a la delincuencia sigue siendo muy alta y la justicia penal sigue siendo mucho más lenta de lo que la gente necesita”(Sagasti, 2007).

En conclusión, el discurso gubernamental logró articular alrededor de la demora judicial dos discursos aparentemente contradictorios. La demora judicial sirvió de conector entre por un lado las violaciones de derechos humanos que representaban la superpoblación carcelaria y los presos sin condena y por el otro la ineficiencia para castigar los delitos asociada a la inseguridad. El gobernador bonaerense expresó esta articulación del discurso gubernamental argumentando, una vez más, por otra reforma de la administración de justicia penal :

…es una reforma penal hecha en condiciones de colapso. Ese es el diagnóstico […]. [H]ay que terminar con los jueces que dan audiencias para dentro de cinco años, con los penados inocentes que están dentro de las cárceles, y con los reincidentes que salen y vuelven a cometer delitos porque no tienen condena firme. […] Si la Justicia no condena, la seguridad es un tema relativo, que no sólo compete a la Policía (“Solá defendió ayer dos polémicas leyes”, 2007).

De esta forma el discurso gubernamental moldeó el debate sobre la demora judicial y allanó el camino para intervenir esos sectores a través de reformas en la organización judicial y en el procedimiento penal. Estas reformas dieron lugar a una redistribución del poder dentro de la organización judicial –por ejemplo, otorgando poder a fiscales a costa de los jueces– y una redefinición de las prácticas judiciales cotidianas mediante la introducción de técnicas de gestión.

La introducción de técnicas de gestión fue promovida por el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA), un organismo internacional creado en el seno de la OEA (Organización de Estados Americanos) y con sede en Chile. El CEJA surge en la primera década del siglo XXI y logra en poco tiempo convertirse en el centro de referencia de los discursos reformadores. Su discurso se presenta como eminentemente técnico, ofreciendo soluciones que son adaptadas localmente y sustentadas en datos duros. Estos datos surgen de una serie de investigaciones que el CEJA promueve en las distintas jurisdicciones latinoamericanas. Sin embargo, el diseño de estas investigaciones evidencia que su objetivo es menos el de comprender el funcionamiento de las administraciones de justicia locales y, a partir de este conocimiento, proponer cambios, que el de comprender cómo introducir una serie de cambios que forman parte de un programa cuasi estandarizado de reformas. Estas investigaciones buscan identificar las resistencias a estas reformas y los efectos que producen.[[11]](#footnote-11)

La demora judicial en la administración de justicia penal ocupa un lugar privilegiado en los discursos y programas del CEJA. Fue justamente la capacidad de reducir esta demora judicial, al menos en ciertos casos, el éxito de sus programas. Sus soluciones sintetizan los discursos reformadores previos: buscan implementar un sistema acusatorio y oral, modificar la estructura organizacional para dotarla de flexibilidad, reorganizar los recursos humanos y materiales para un uso más racional de ellos, y partiendo desde el reconocimiento de la incapacidad del Estado de realizar juicios orales en todos los casos, promover una serie de mecanismos de solución alternativa (juicio abreviado, mediación penal, suspensión del juicio a prueba, archivo de la causa).

Pero la particularidad de los discursos y programas del CEJA fue el hecho de estar diseñados desde una perspectiva de la gestión. Si bien la falta de enfoque de gestión en el diseño y organización de la administración de justicia penal ya había sido señalada previamente en numerosas ocasiones, estos trabajos no habían propuesto soluciones concretas.[[12]](#footnote-12) El CEJA, en cambio, no sólo propuso un programa concreto de reformas basadas en la gestión, sino que también ofreció un programa de implementación de estas reformas, es decir un programa de gestión del cambio organizacional (Duce, 2005).

Para sostener la centralidad de la demora judicial el discurso gubernamental se nutrió de los discursos técnicos como el del CEJA y sus programas de reforma. A su vez, los discursos gubernamentales le dieron notoriedad a estos discursos técnicos sobre los que se apoyaron. Como contrapartida de esta relevancia que recibieron en los discursos gubernamentales, el enfoque de los discursos técnicos se distanció de las críticas más radicales a la administración de justicia penal y se orientó a ofrecer cambios moderados políticamente posibles. Este pragmatismo político les permitió aunar el apoyo de sectores de todo el arco ideológico a sus programas de reforma judicial. El CEJA es un caso paradigmático en este sentido.

Siguiendo a Binder (2007), el discurso del CEJA al tiempo que introducía la racionalidad de la gestión a través de conceptos como productividad y cambio de cultura organizacional, y centrando su objetivo en la erradicación de la demora, asociaba esta búsqueda de celeridad con la de reducir el uso y extensión de la prisión preventiva (Riego, 2010: 9; Vargas Viancos, 2005: 10).

Estos discursos técnicos y políticos y sus programas de reforma, y en especial la línea de reformas impulsadas por el CEJA, introdujeron innovaciones técnicas, cambios en la organización del trabajo, e incluso redefinieron los roles tradicionales de los actores judiciales. Esta estrategia de reforma es definida por Heydebrand (1977) como tecnocrática. Heydebrand sostiene que la estrategia tecnocrática acaba modificando la naturaleza de la tarea de juzgar en sí y de las soluciones judiciales y es precisamente este fenómeno el que se observa en la administración de justicia penal bonaerense.

En la próxima sección se explora este fenómeno de cambio a través del trabajo de campo.

# 

# Segunda parte: Traduciendo discursos a prácticas diarias

Los discursos reformistas al referirse al juicio oral lo hicieron respecto del debate propiamente dicho, pero para que este debate tuviera lugar era necesario llevar a cabo una serie de procedimientos previos. El análisis de las prácticas judiciales cotidianas ilumina estos procedimientos y cómo estos influencian al debate oral.

El análisis presentado a continuación es el resultado del trabajo de campo llevado a cabo entre los meses de febrero y diciembre de 2010. Este trabajo consistió en la observación del trabajo diario en dos juzgados de garantías, dos tribunales criminales y una fiscalía de tres departamentos judiciales de la PBA.

A su vez, se entrevistaron 45 actores judiciales (funcionarios y abogados particulares) durante dicho año. Los actores entrevistados son “testigos expertos” o “informantes privilegiados” de los efectos que el proceso de reforma tuvo en la administración de justicia penal. En las entrevistas se buscaba no sólo conocer situaciones no directamente observables –ya sea porque ocurren en espacios no accesibles para el observador como por haber sucedido en el pasado– sino también cómo se habían experimentado esos hechos, es decir la perspectiva de los actores judiciales sobre los cambios que trajeron aparejados los procesos de reforma. La entrevista en profundidad es particularmente útil para lograr esto (Piovani, 2007: 220; Valles, 2007: 55). Las entrevistas fueron semiestructuradas. Se desarrolló un “guión de la entrevista” que traducía las “preguntas de teoría” o cuestiones de investigación (objetivos, hipótesis, etc.) en “preguntas de entrevista”, es decir, preguntas formuladas en un registro cercano a los entrevistados que incluyó términos técnicos jurídicos comunes del cotidiano de los actores judiciales (Valles, 2007: 59).[[13]](#footnote-13) De todas formas, al ser entrevistas abiertas, el guión de la entrevista fue utilizado como guía pero el orden de las preguntas e incluso las preguntas mismas variaron a lo largo del desarrollo de las entrevistas (Valles, 2007: 64). En definitiva, como señala Piovani, “la entrevista no tiene reglas fijas y por lo tanto no se puede hacer siguiendo una receta (…) se trata de una práctica eminentemente artesanal” (Piovani, 2007: 221)

Posteriormente se ha realizado un trabajo de actualización y confirmación a través de 6 nuevas entrevistas y observaciones entre los meses de mayo y julio de 2014 en un juzgado de garantías de uno de los departamentos previamente observados**.**

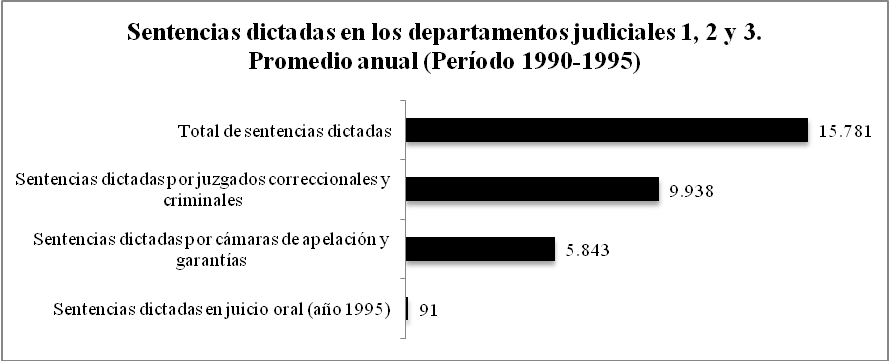
En otras ocasiones hemos descripto los cambios que provocó el sistema de audiencias tempranas para el juzgamiento de delitos flagrantes (Ciocchini, 2012) y el adelantamiento del momento resolutivo del proceso como consecuencia de la utilización de mecanismos alternativos al juicio tales como el juicio abreviado, la suspensión del juicio a prueba y la mediación (Ciocchini, 2013). En la próxima sección se focaliza en el juicio oral. A través del trabajo de campo se exploran las prácticas y representaciones de los actores judiciales en esta etapa procesal. Como se ha descripto en la sección anterior, el discurso reformador presentó al juicio oral como paradigma de eficiencia y transparencia. De hecho, en las entrevistas, los actores judiciales coinciden en su descripción y valoración con estos discursos. Sin embargo, las prácticas concretas muestran un juicio oral excepcional y muy distinto al descripto en la literatura reformista. Esta sección busca identificar estas prácticas y comprender su racionalidad, es decir, evitar definirlas por sus diferencias con el modelo ideal sino por el contrario intentar comprender su sentido en el contexto específico en el que tienen lugar.

**La complejidad del juicio oral**

La transición del juicio escrito al juicio oral tiene una larga historia en Argentina. En la PBA el juicio oral fue introducido en un breve período en el año 1975 pero es eliminado al año siguiente por la dictadura militar. Con la consolidación de la democracia en la década de los ochenta se vuelve a introducir el juicio oral y público en la PBA como opción para el imputado en los casos de los delitos más graves. Por esta razón el juicio oral, además de ser presentado como más rápido por los discursos reformistas técnicos y políticos, se identifica históricamente con un mecanismo de democratización de la justicia al permitir (a través de la audiencia pública) transparentar la actuación de la justicia. Sin embargo, como explica el fiscal de casación T, eran muy pocos los casos durante la vigencia del Código Jofré en los que se llegaba a realizar un juicio oral:

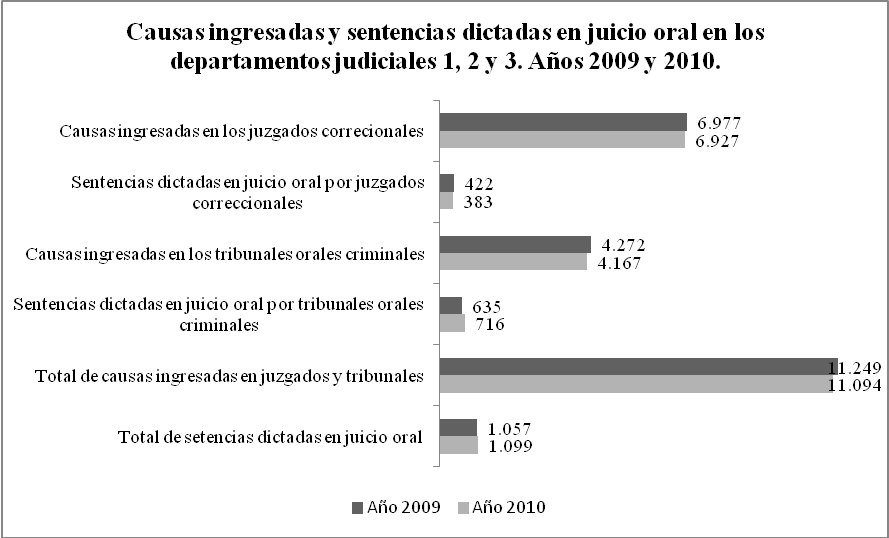
Juicio oral había... [El Código] Jofré tenía el juicio oral obligatorio en todos los hechos con resultado muerte, todos los hechos dolosos con resultado muerte, creo que así era, y optativo en los demás, fijate que a pesar de haber tanta propaganda en favor de la opción del juicio oral, en las causas en las que pude tener contacto nunca la vi. Nunca vi que nadie optara por el juicio oral. Es más, el juicio oral era un acontecimiento, se esperaba un juicio oral, se preparaba un juicio oral, veías estudiantes que los traían *ex profeso* al juicio oral porque no eran frecuentes las ocasiones del juicio oral (fiscal de casación T)

Los datos que presenta De Lázzari (1997) –actual ministro de la SCBA y previamente procurador general de la SCBA y secretario de seguridad de la PBA–permiten darle magnitud al relato de la fiscal de casación T. Según estos datos, en los tres departamentos judiciales que se analizan, ingresaron 1.515.638 causas en los juzgados criminales y 101.116 a las Cámaras de Apelación y Garantías durante el período que va de 1990 a 1995. Esto significa que los juzgados de dichos departamentos judiciales tuvieron una carga promedio de 252.606 causas anuales y las Cámaras de 16.853 causas anuales. Sobre esa carga de trabajo, según De Lázzari, los juzgados dictaron un promedio de 9.938 sentencias por año y las Cámaras 5.843, es decir en total se dictaron 15.781 cada año. Pero, en el año 1995 sólo 91 de estas sentencias fueron dictadas en juicios orales.



Con la reforma del CPP implementada en 1998 el juicio oral y público pasa a ser obligatorio para todas las causas. Para llevar dichos juicios a cabo se instituyeron Juzgados Correccionales unipersonales para los delitos más leves y Tribunales Orales Criminales colegiados para los casos más graves.

A pesar de esto y de la convicción que expresaron los actores judiciales entrevistados sobre el juicio oral, (lejos de ser la regla) la realización de dicho juicio continuó siendo excepcional. Según las estadísticas suministradas por la SCBA durante el año 2009 en los tres departamentos judiciales estudiados, se dictaron 422 juicios orales por los Juzgados Correccionales y 635 por los Tribunales Orales Criminales, un total de 1.057 sentencias. Los datos para el año 2010 son muy similares, 383 sentencias en juicios orales dictadas por los Juzgados Correccionales y 716 por los Tribunales Orales Criminales, un total de 1.099 sentencias. Si bien estas 1.057 y 1.099 sentencias en juicios orales contrastan con las 91 dictadas en 1995, para comprender su excepcionalidad se las debe comparar con el total de causas ingresadas en los juzgados y tribunales de los tres departamentos judiciales estudiados durante los años 2009 y 2010. Según los datos que la SCBA publica en su sitio de Internet (n.d.), en el año 2009 ingresaron 6.977 causas en los Juzgados Correccionales y 4.272 causas en los Tribunales Orales Criminales, un total de 11.249 causas. En el año 2010 ingresaron 6.927 causas en los Juzgados Correccionales y 4.167 en los Tribunales Orales Criminales, esto es 11.094 causas en total. Por lo tanto, menos de un décimo de las causas que llegan a la instancia de juicio acaban en un juicio oral.



Por otra parte, si comparamos la cantidad de causas que acaban en juicio oral con la totalidad de causas que ingresan en la administración de justicia penal bonaerense se comprende aún más la excepcionalidad del juicio oral. En los tres departamentos estudiados durante el año 2009 ingresaron 123.311 causas (Procuración General, 2011a) y 122.791 en el año 2010 (Procuración General, 2011b). Es decir, las causas que llegan a juicios orales son menos del uno por ciento de la totalidad de causas que ingresan.

El juicio oral es evitado porque es complejo y costoso ya que requiere movilizar a jueces, secretarios, fiscales, defensores, imputado, víctima, testigos, peritos y demás durante uno o varios días. Los actores judiciales entrevistados sostuvieron que el Estado no tiene la capacidad para procesar todas las causas a través de juicios orales:

Pero si todo, si el cien por cien [de las causas] fueran a juicio sería imposible (juez F2).

El juicio oral es lo deseable pero también la práctica ha demostrado que […] hay una incapacidad absoluta del Estado de llevar a juicio todas la causas y no creo yo que sea tampoco necesario. […] Desde que hacemos los primeros palotes en la facultad decimos que la verdadera garantía es el juicio oral donde podemos confrontar los testigos, donde podemos ofrecer la prueba, etc. y sin embargo, aun antes del procedimiento de flagrancia, en este departamento judicial el 80% de las causas se resuelven por juicio abreviado (juez B2).

Pero esto no es problemático para ellos, ya que lo importante es que exista siempre la posibilidad para el imputado de decidir ser juzgado en un juicio oral y público:

También es cierto que las partes tienen la posibilidad de ir a un juicio, que es el lugar donde realmente debe ventilarse en forma amplia, que es lo que te da más garantías y por ciertas razones prefieren desistir de esa etapa y te lo piden con antelación (jueza Ñ2).

Sin embargo, para el juez W la excepcionalidad del juicio oral sí es problemática porque afecta la imagen e incluso la función de la justicia penal. El juicio oral y público tiene según él una importante función simbólica que no pueden reemplazar las salidas alternativas:

La economía de recursos se ha denunciado que viene en desmedro de garantías constitucionales, etc. En realidad, es un toma y daca en la que salen ganando muchas veces los justiciables porque el Ministerio Público Fiscal resigna pretensiones por un lado de no llevar a juicio casos que simbólicamente requieren de la publicidad para que la sociedad sepa que se hacen juicios y no acordar penas breves en la clandestinidad de un abreviado. Porque hace falta simbólicamente, el ritual judicial no es al pedo. Existe [porque] se habla tanto de la función penal de la teoría de prevención general positiva integradora, [y] la comunicación, digamos, toda la sanata funcionalista alemana (que yo no creo decididamente) pero no puedo negar el carácter comunicativo que tiene la función judicial. Entonces se pierden muchos juicios que simbólicamente podrían servir: robos con privaciones, en vez de juicios abreviados con cuatro años, tres y medio, con buenos negocios para las partes, tenemos una cantidad de recursos que podrían ir dirigirlos a otro lado (juez W).

En este sentido, el de su poder simbólico, varios entrevistados nombran al juicio por jurado, viejo anhelo de los reformadores. A pesar de estar establecido por la CN desde mitades del siglo XIX el juicio por jurado no fue implementado en la PBA hasta el año 2015. Si para el discurso reformador el juicio es el momento prototípico de la justicia, el juicio oral y público por jurado es el modelo prototípico del juicio. Los relatos del fiscal I2, el fiscal general I y el juez E2 ilustran el poder simbólico del juicio por jurados:

…obviamente lo ideal en una utopía, todo se tendría que resolver en debate oral. Si seguimos en la utopía tendríamos que tener juicio por jurados como dice la constitución, como en Estados Unidos, donde hay un director de audiencia que es el juez y un jurado que en definitiva decide si la persona es culpable o no es culpable (fiscal I2).

Para mí es un tema importante, no para todos los delitos y esto tiene que ver con que la gente haga una especie de escuela, de formación, [para] entender al Poder Judicial. Yo planteaba el otro día que en realidad nosotros dictamos sentencia con [el] testimonio de la gente, con lo cual seguir planteando que para juzgar la gente no está capacitada, si nosotros, insisto, no siempre es exclusivamente con el testimonio de la gente, pero muchas veces una pericia y dos testigos nos permite condenar. Bueno, esa misma gente, que a veces se ve sorprendida por un delito en la cuadra de su casa, ¿cuál sería el problema de traerla y explicarle qué es lo que tiene que analizar? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué delito se investiga? Como se hace en todos lados. Y hacer que sea en un solo rubro esto porque si no sería, por lo menos para nuestra cultura, muy complicado (fiscal general I).

Faltaría el punto final que sería la incorporación de los jurados. Que tendría que estar naturalmente limitada porque en ningún lugar del mundo el jurado se ocupa de todo. Podría ser una solución tipo la cordobesa para algunos delitos como con resultado muerte, ellos lo están usando también para los que se vinculan al tema de corrupción. Bueno, una cosa así. Sería lo que faltaría, ¿no? Bueno desde el punto de vista del rol del juez es un sistema muy satisfactorio (juez E2).

Pero el juicio oral en la práctica se encuentra lejos del idealizado juicio por jurados. La indignación en el relato del abogado defensor particular G de su experiencia en un juicio oral señala que no sólo el juicio pierde legitimidad por la ausencia de la participación popular a través del jurado, sino también por la contradictoria actitud de los jueces que imponen autoritariamente un formalismo riguroso ante su presencia para luego ausentarse inexplicablemente en el momento crucial de hacer conocer su sentencia:

P: ¿Cuántos días fueron de debate?

R: Tres días. Al pedo tres días porque los jueces venían a la una de la tarde y se iban a las tres, una cosa así, el debate era una pelotudez, en un rato tomaba[n] dos testimoniales de mierda y se iba[n]. Te hacían ir a vos temprano [...] [y ellos] no laburaban nada. Lo peor, esto es una crítica, por ejemplo cuando nos dieron la sentencia y el veredicto […] Después a mí me pareció todo un circo, toda la formalidad, el secretario, el tribunal, el escrito, y cuando le leyeron la sentencia que le daban 12 años lo leyó un auxiliar letrado en un cuartito, y los jueces lo único que hicieron fue pasar por atrás porque se tenían que ir. “Buen día” dijeron... O sea me pareció muy fuerte... (abogado defensor particular G2).

Lo cierto es que aun en los casos donde no hay desdén por parte de los jueces, el juicio oral y público pierde mucho de su poder simbólico por la demora judicial. Los discursos reformistas al promover el juicio oral y público no repararon en el tiempo que insume su compleja preparación.

**La preparación para el juicio**

El debate oral es el final de la etapa de juicio que comienza una vez dictada la elevación de la causa a juicio por el juez de garantías. Esta etapa comprende no sólo el juicio propiamente dicho sino una serie de actos procesales previos al juicio. Estos actos incluyen: la radicación de la causa en un juzgado o tribunal, la posibilidad de los jueces de excusarse o de las partes de recusarlos (en los casos donde hubiere conflicto de intereses), la audiencia donde se fijan la fecha del juicio oral y las pruebas a producir durante el mismo, junto con las posibles incidencias respecto de la prisión preventiva o de elementos secuestrados. Del relato del juez H2 se hace evidente que, a pesar de que él considere muy reducida la posibilidad de controversias, dicha etapa está lejos de ser sencilla:

[En] un tribunal oral no tenemos una situación muy complicada porque [cada] causa que llega tiene que estar preparándose para un debate o para un juicio abreviado. Pero vamos a hablar del debate que es lo que tiene por finalidad un tribunal oral como su nombre lo indica. Son muy pocas las cuestiones que se pueden plantear acá. A veces se plantean nulidades, inconstitucionalidades que se resuelven… (juez H2)

Como se ha desarrollado en la primera parte de este artículo, los programas de reforma promovieron la oralidad relacionando al juicio oral y público con la celeridad. Esta relación se hizo abstrayendo al juicio oral de la etapa previa y reduciéndolo así al momento del debate. Estos discursos compararon entonces el tiempo que puede insumir la audiencia de debate con el tiempo total que tomaba un procedimiento por escrito. El relato del juez F2 reproduce dicha comparación:

…si uno se va a la etapa propiamente de juicio se concentra en un debate. El juicio se concentra en una audiencia, están las partes, están los jueces y el plazo de resolución es corto. O sea, termina el debate y el tribunal tiene cinco o siete días según el caso para resolver la situación. En el proceso escrito del código Jofré si bien había plazos, que eran mayores los plazos [...] era como que se esfumaba en el tiempo la resolución del caso. Además el procedimiento oral lo que tiene es que es visible, es visible a la sociedad. Es público y es visible. Es visible, quiero decir que termina el debate y todos saben que en un máximo de cinco días puede estar la resolución, no se puede proyectar en el tiempo y decir: “bueno, me siento tranquilo a resolverlo y en un mes doy la respuesta”. No, no es así. Yo creo que es más rápido (juez F2).

Sin embargo, el juicio oral y público también requiere de un procedimiento previo que puede convertirse en engorroso y burocrático, sumado a la complejidad de realizar la audiencia de debate. Durante esta etapa, que puede durar meses pero también años en los procedimientos ordinarios, es común que las partes acaben llegando a un acuerdo de juicio abreviado o incluso una suspensión del juicio a prueba.

Mientras que en el caso de los delitos flagrantes, la implementación de audiencias orales antes de los 20 días (con una posible prórroga por 20 días más) a partir del año 2004 ha desplazado la negociación hacia el comienzo del proceso, en los procedimientos ordinarios la negociación sigue ocurriendo después de meses o años, ya concluida la investigación penal preparatoria:

…antes por ahí, [el acuerdo] se daba más que nada al momento de elevación a juicio o por ahí en la audiencia del artículo 338, o al momento en que radicaba la causa en el órgano de juicio. En ese momento donde se pedía por parte de la defensa la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba, que de hecho hoy con el procedimiento común se sigue trabajando de la misma forma en lo que es no flagrancia y es procedimiento ordinario… (fiscal I2)

Tanto fiscales como defensores buscan evitar el debate oral ya que este requiere tiempo para su preparación y ejecución. Los relatos del juez K2 y la fiscal de menores E ilustran esto:

No, por supuesto que […] como sistema procesal ni que hablar, el juicio oral es una maravilla, las posibilidades que te brinda para formar tu convicción es tremenda, […] lo que pasa es que es un sistema que requiere de muchos más recursos humanos, no permite delegación […] Vos a vas al juicio y el fiscal no le puede delegar al secretario, ni el juez a nadie, tiene que estar el juez, tiene que estar el secretario, tiene que estar el defensor, requiere de muchos más recursos humanos (juez K2).

Yo al principio quería firmar [juicios abreviados] mucho porque la otra fiscal estuvo de licencia. […] Somos dos fiscales. A mí no me daba el cuero. Yo no podía estar en juicio, entonces ahí yo firmaba abreviados... (fiscal de menores E)

Como explica el defensor oficial G, la disponibilidad que requiere el juicio oral y público no es únicamente respecto de los días que requiere participar de la audiencia de debate del juicio, sino también la preparación previa y el trabajo posterior de elaboración y, en su caso, presentación de recursos:

…tener un juicio oral no es poco, si después el juicio oral implica recursos... (defensor oficial G)

El éxito de los procedimientos especiales para delitos flagrantes fue justamente profundizar esta tendencia a evitar el juicio oral, que ya se encontraba presente, facilitando las negociaciones previas entre las partes. De esta forma tendieron a desplazar el momento de resolución de conflicto al comienzo de la causa durante la etapa de garantías.[[14]](#footnote-14) Los relatos del juez D y el fiscal de menores describen esta tendencia:

Hay un sector de casos que se va a manejar con flagrancia, otra situación se archiva o se desestima previamente, el fiscal hace una especie de filtro, una parte para la flagrancia, el resto del universo de casos que llegan a juicio oral completo es ínfimo [...] es una cuestión casi simbólica [...] es más, ahora comparando esto con la anterior década ahora se puede llegar a un juicio abreviado en homicidio, jamás hubieras llegado a eso con el código de Jofré. El código de Jofré no permitía, había cosas que iban o iban a juicio oral, no tenían salida [alternativa]” (juez D).

…tenemos juicios orales, sí, pero […] [de la totalidad de los casos] un porcentaje muy mínimo va a ir a juicio, que es cuando […] [el autor] es reincidente […] entonces [la ley] no te permite firmar otra suspensión [de] juicio a prueba, no te permite arribar a otro juicio abreviado con lo cual indefectiblemente tenés que ir a juicio, o es un homicidio, que no podés llegar a un juicio abreviado, o un delito aberrante como puede ser una violación en un robo, esas cuestiones, ¿pero cuántos hechos hay en menores? Son ínfimos… (fiscal de menores U)

Gracias al sistema de audiencias, la facultad del juez de garantías de dictar sentencia en los juicios abreviados, y el acortamiento de los plazos procesales en los procedimientos para delitos flagrantes, los acuerdos se tienden a realizar en forma inmediata. Sólo en los casos en que el juez de garantías ofrece resistencias se posterga el acuerdo para la etapa de juicio:

P: De esa cantidad de causas, ¿cuántas se resuelven antes de llegar a juicio?

R: Muchas, muchas... Mirá, tenemos un inconveniente nosotros, que por eso no podemos resolver todas las que quisiéramos, se resuelven muchas, pero algunos jueces […] mantienen la tesis restrictiva en la suspensión de juicio a prueba. Entonces en todo lo que excede tres años en abstracto la pena no lo incorpora a la suspensión de juicio a prueba. Entonces nosotros para no tener que ir a Cámara [de Apelación y Garantías] a apelar, si no va a cambiar su criterio el juez, directamente la solucionamos en la audiencia 338 o del 17 y la arreglamos en juicio... pero si no se resuelve bastante en la etapa de instrucción...

P: ¿O sea que esto alivia a los Juzgados Correccionales y a los Tribunales Orales Criminales?

R: Síííí, y a los fiscales de juicio. Los fiscales de juicio son un montón, hoy tenemos como 10 o más y la verdad […] con la flagrancia se quedan casi sin trabajo (fiscal Q).

Sin embargo, esta situación es más bien excepcional. Los testimonios de los actores judiciales entrevistados señalan la altísima proporción de casos resueltos antes de llegar a juicio. El objetivo declarado del plan para delitos flagrantes era aliviar a los órganos de juicio de los casos sencillos y reservar su disponibilidad para los casos más complejos. Según los relatos de los actores los órganos de juicio quedaron liberados de una importante carga de trabajo y la demora que tenían para realizar los juicios disminuyó drásticamente:

…una cuestión que se observó de inmediato fue la descongestión paulatina de los organismos de juicio. Con lo cual hoy en este departamento judicial en los hechos graves que no son de flagrancia se lleva a juicio en ocho/nueve meses en la medida que no tengamos diligencias periciales que excedan el cuerpo de peritos de la ciudad… (fiscal general I)

P: ¿Han variado los tiempos de causas ordinarias con la flagrancia?

R: Sí, la consecuencia se da por la descongestión. Nada más que por eso. Se han liberado los tribunales de cierto caudal de causas que se terminaban decidiendo acá y que ahora el juez de garantías le permite decidir una sentencia condenatoria.

P: ¿Se sabe cuánto tiempo tarda una causa en tener un juicio?

R: En un tribunal criminal no más de un año. No más de un año del tiempo total, desde el día del hecho. Porque ahora sí los tribunales tienen impuesto, digamos, el fiscal cuatro meses para investigar prorrogables, o por seis meses o por otro tiempo igual, más seis meses, [el] tribunal [tiene la] obligación de realizar el juicio oral, con una etapa intermedia que puede llevar treinta días o quizás dos meses. Más allá de esa interpretación de la ley, en la realidad ocurre, no pasa más de un año. […] Este tribunal por ejemplo tiene disponibilidad para juicios orales, agenda quiero decir, no es como a veces se piensa que los juicios abreviados son impulsados o empujados por los propios tribunales […] en este tribunal al contrario disponemos de agenda para que se realicen juicios orales (juez A2).

Pero este objetivo se cumplió parcialmente. La descongestión de las fiscalías ordinarias y el alivio de los juzgados y tribunales no tuvieron como consecuencia la profundización en la investigación de casos más complejos ni el juzgamiento de casos más graves. Según relata el juez E2 el efecto fue únicamente la reducción de los casos a juzgar por estos órganos:

Lo que te quería significar es que, por ejemplo, hace unos cinco o seis años, los tribunales criminales estaban recibiendo un promedio de cuarenta y pico de causas por mes, por juzgado, en este departamento judicial. Eso bajó a poco menos de 30 cuando se cambia la competencia para los correccionales, se le aumenta y va algún flujo más a los correccionales. Pero digamos que antes de la implementación de este plan estaban recibiendo, qué se yo, 24, 25 causas por mes por tribunal criminal. Claro, teníamos un sistema que le atajaba todas las causas sencillas porque se solucionaban con la gestión eficiente de la flagrancia y con la realización de suspensiones de juicio a prueba, archivos, juicios abreviados, y en lapsos muy cortos… bueno, se bajó, sustancialmente lo que venía de esos casos. Lo que nosotros aspirábamos no era a que bajara el nivel de casos que recibía un juzgado criminal, un tribunal criminal, lo que aspirábamos es a que recibiera lo mismo pero distinto, digamos, la misma cantidad pero distinta calidad, que no recibiera casos sencillos y que empezara a recibir casos complejos. Lo que vimos es que en realidad hoy están recibiendo entre 10 y 11 causas por mes, o sea, menos de la mitad de cuando empezó el plan. Y de esos 10 a 11 tres y pico son de flagrancia, o sea que están recibiendo 7, o sea ahí está el problema (juez E2).

Además de fomentar el alivio de la carga de trabajo, las reformas de los procedimientos para delitos flagrantes afectaron el funcionamiento de Juzgados Correccionales y Tribunales Orales Criminales al introducir la OGA. Las OGAs son organismos introducidos en el año 2004 a cargo de la coordinación de las audiencias multipropósito durante la investigación penal preparatoria para el tratamiento de delitos flagrantes (Hazán & Riego, 2007: 260). Esta función de coordinación implicaba administrar el uso de la sala o salas de audiencia entre los jueces de garantías del departamento judicial; notificar los horarios de las audiencias a fiscalía, defensoría y policía cuando el imputado está detenido para asegurarse su presencia y controlar que se encuentre en condiciones la sala de audiencias (Hazán & Iud, 2009: 183). La OGA está inspirada en el sistema chileno, donde el responsable de las tareas administrativas está claramente diferenciado del de las decisiones jurisdiccionales. En el año 2009 la ley 13.943 elevó el status de las OGAs de oficinas a secretarías SGAs y le asignó junto con la coordinación de las audiencias en la etapa de garantías la de coordinar la realización de los juicios orales para delitos flagrantes. Sin embargo, los tribunales se resistieron a delegar esta función. La ley sólo comenzó a implementarse a finales del año 2010, año durante el cual se realizó el trabajo de campo, por lo que no se pudo valorar completamente los efectos que tuvo. De hecho, la SGA no fue implementada en dos de los tres departamentos judiciales en los cuales se realizó el trabajo de campo hasta el año 2014 (SCBA Res. 5/14). El defensor oficial M, entrevistado en el mes de noviembre de 2010, reclamaba su cumplimiento para evitar la demora de los tribunales:

Para mí la solución a eso es la que está planteada en la ley, pero todavía no se llevó a cabo, lo más importante es que se le dé realmente la competencia a la secretaría de audiencias para fijar las audiencias de debate e imponérselas a los tribunales. Eso es el aspecto que hace que cambie la cuestión. Hoy en La Plata, las audiencias de debate las siguen fijando los tribunales orales a su criterio (defensor oficial M).

Junto con la introducción de la SGA, los juzgados y tribunales sufrieron una importante reforma de su estructura organizacional. A la reducción de casos que llegaban a juicio por ser resueltos a través de un acuerdo de juicio abreviado, mediación o suspensión de juicio a prueba en la etapas de garantías, se sumó la reforma realizada en los Tribunales Orales Criminales que estableció que salvo en los casos más graves o que fuera solicitado por el imputado, los tribunales se conformarían con un solo juez. Esta conformación es denominada “unibunal” por el juez J:

R: Hoy [en día] los correccionales no tienen razón de ser.

P: ¿Qué significa que no tienen razón de ser?

R: Son organismos que tienen una competencia acotada. Y la competencia acotada se justificaba si son unipersonales. El hecho de tener Juzgados Correccionales unipersonales se justifica cuando para los delitos más graves vos necesitás tres jueces. Por este diagrama procesal de instancia única. De juicio oral de doble apellido. Juicio oral de instancia única. Hoy está la opción de hacer el unibunal que es evitar la integración plural en una causa en juzgamiento criminal. Con lo cual el Tribunal [Oral] Criminal recibe más causas y resuelve unipersonalmente. No entiendo las razones por las cuales todo va a ser unipersonal, o la gran mayoría va a ser unipersonal. [Los casos que trataban los Juzgados Correccionales son] sobre todo los que terminan en *probation*. [Y] la *probation* termina en [la etapa de] garantías (juez J).

De esta forma, los Juzgados Correccionales que se caracterizaban por ser unipersonales y juzgar los delitos más leves perdieron aún más su especificidad.

Los Juzgados Correccionales, liberados de su carga de trabajo “natural” por la reforma, absorbieron los casos contravencionales, es decir acciones sancionadas sin llegar a constituir un delito. Para el fiscal N, en oposición a la visión que expresó el juez J, esta nueva función que han adquirido los Juzgados Correccionales justifica su continuidad. En su perspectiva son los Tribunales Orales Criminales orales quienes tienen un exceso de recursos, en especial de personal designado:

…de hecho vos vas a cualquier tribunal de juicio, a cualquier Juzgado Correccional, los juzgados tienen un problema adicional con todo lo que es contravencional. Pero los tribunales de juicio tienen ocho, nueve, diez empleados cada uno y no entendés qué están haciendo. Porque en realidad un tribunal de juicio significa tres tipos que se sientan a hacer audiencias a escuchar y se juntan en la pieza a deliberar y a lo sumo después escriben la sentencia. Pero todo lo demás, todo ese montón de personal que tienen alrededor, por supuesto que generan burocracia que justifica al personal, pero esto porque la burocracia se justifica a sí misma, y este es un problema muy serio [que] cuando vos armás un sistema para la oralidad se te terminan las excusas de la burocracia (fiscal N).

Las opiniones del juez J y el fiscal N (a pesar de ser opuestas respecto de los órganos que señalan como redundantes) acuerdan que las reformas del plan para delitos flagrantes han modificado profundamente el flujo de trabajo dentro de la etapa de juicio y que es necesario un ajuste acorde a este nuevo flujo en la distribución de recursos. Como explica la defensora general B, el temor a ser considerados innecesarios o excesivos provocó que los jueces del departamento judicial 2 comenzaran a presionar a las partes para que no acordaran soluciones alternativas y así llegaran más causas a juicio oral:

…lo cierto es que acá produjo una descongestión muy importante en los órganos del juicio. Produjo una descongestión muy importante porque de pronto pasó a no haber atraso, de pronto pasó que los jueces no querían suspender debates porque si no los dos debates que tenés, no tenían ninguno, entonces se empecinaban en que no querían suspenderlo y querían hacerlo sí o sí porque necesitaban justificar su eficiencia por estar realizando debate (defensora general B).

Pero si bien el nuevo circuito de trabajo liberó a los jueces y tribunales, no obtuvo el mismo resultado con los fiscales. Esto generó que la presión de los jueces para generar mayor cantidad de juicios llevara a saturar la agenda de los fiscales en ese departamento judicial. De esta forma, mientras los jueces (quienes históricamente se resistieron a la introducción de reformas y en especial a incrementar la cantidad de juicios orales mensuales) presionan para realizar mayor cantidad de juicios y en consecuencia reducir el tiempo de espera, es el Ministerio Público Fiscal, la organización que promovió la introducción del plan de flagrancia, quien lo impide por falta de disponibilidad de fiscales. El fiscal general I admite está falencia de su organización:

P: ¿La flagrancia llevó a que los procesos ordinarios tengan mayor celeridad también?

R: Sí, sí, fue el primer efecto, además sin necesidad de tener que hacer ninguna otra medida, ni viaje a Chile, ni capacitación, ni nada […]. Estamos en diciembre; hay tribunales que están fijando fecha de juicio a julio del año, cosas de este tipo. Aquí ya sí hay un problema que no tiene que ver con el sistema, sino que tiene que ver con que yo no tengo más fiscales, si tuviera más fiscales podríamos estar, o si hubiera más defensores podríamos estar fijando a marzo, abril. El otro día un tribunal me decía “lo podemos hacer en marzo en una causa elevada a tres meses para que pueda tener el juicio” y estamos buscando para ver si podemos conseguir algún fiscal que no tenga juicio, que no esté con vacaciones o que se quede en enero, por ejemplo (fiscal general I).

Esto evidencia que las reformas fueron eficaces desde la perspectiva gerencial al promover soluciones negociadas de baja complejidad práctica. Pero el efecto paradójico es que la capacidad de ciertos órganos es subutilizada y estos para evitar su posible desmantelamiento promueven prácticas contrarias a las reformas. Lo preocupante aquí es que tanto las reformas propuestas como las prácticas de resistencia no están guiadas por objetivos de política criminal, de respeto a los derechos humanos o en términos más generales por consideraciones jurídicas o político-jurídicas, sino por una puja por recursos económicos.

De todas formas, durante el trabajo de campo, se pudo observar en un Tribunal Oral Criminal del departamento judicial 1 que se alternaban juicios por causas por delitos flagrantes cometidos menos de cuatro meses atrás con juicios por delitos “no flagrantes” cometidos hacía ya varios años. En estos últimos, los imputados fueron aprehendidos en flagrancia (pero antes de que se implementaran los procedimientos especiales) o son delitos con penas máximas mayores a los 15 años (y por lo tanto no tramitan con los procedimientos especiales) o los imputados fueron detenidos luego de haber cometido presuntamente el hecho gracias a la investigación del fiscal. No obstante, estos casos son excepcionales dentro de la excepcionalidad de los juicios. Las causas con detenidos tienen prioridad y las que no tienen detenidos suelen ser de casos menos graves y por lo tanto con mayor posibilidad de prescribirse. Como explica el juez K2 también se encuentran los casos de incumplimientos de suspensiones de juicio a prueba:

Nosotros por ejemplo en las causas de flagrancia hemos llegado a dictar sentencia en hechos, en causas que, de hecho habían sido cometidas dos meses antes. Y también, bueno, vos habrás visto por ahí estamos dictando sentencia en hechos que fueron ocho años atrás. Por ahí tiene que ver también si se arregló una suspensión de juicio a prueba y no se cumplió, te termina viniendo a vos después de años o si la causa no tenía detenidos… (juez K2)

Sin embargo, las suspensiones de juicio a prueba no suelen ser controladas; por lo tanto el caso de incumplimiento suele reducirse a la comisión de un nuevo delito (Ciocchini, 2013: 1784-1785).

En conclusión, si bien el procedimiento de flagrancia no logró que la menor carga de trabajo de los tribunales tuviera como consecuencia que se juzgaran delitos más complejos, sí logró que las causas por delitos flagrantes, la mayoría de las que llegan a juicio, fueran juzgadas en menos de cien días desde el momento de comisión del hecho, algo verdaderamente novedoso en la administración de justicia penal bonaerense.

**El debate oral**

Para comprender por qué los actores judiciales evitan el juicio oral (o cuando no pueden evitarlo buscan simplificarlo) a pesar de reivindicarlo como el modo en que “deberían” resolverse todas las causas, es necesario analizar las prácticas que lo rodean.

El debate en el juicio oral del sistema acusatorio prescribe una actitud pasiva para los jueces los cuales deben coordinar el debate pero evitar interferir en las presentaciones de las partes. La tarea de los jueces es valorar los argumentos y las pruebas ofrecidas por las partes durante el debate. Para ello deben prescindir de las pruebas, o elementos de convicción, que se documentan en el expediente judicial. Las pruebas deben producirse en el debate, esto es: los testigos declarar, los peritos exponer sus conclusiones a viva voz, etc. La incorporación de la prueba ya realizada y documentada por lectura (es decir, la lectura de las actas donde constan testimonios y pericias) está permitida en forma excepcional cuando no sea posible reproducirla. El juez H2 ofrece la perspectiva oficial sobre el rol del juez durante el debate oral:

Al tribunal todo lo que dice el fiscal en la instrucción no le sirve, o sea no está habilitado a valorar, lo único que tiene es una prueba que las partes piden que se incorpore por lectura y lo que se resuelve en el debate. Muchas veces hay situaciones de disparidad, no digo de contradicción, puede haberlas, normalmente una disparidad entre la declaración de las partes que declararon en comisaría en el momento del hecho y hay una cuestión que lo pueden definir a veces de un modo distinto de lo que hicieron en su momento. Nosotros tenemos que valorar solamente lo que oímos en el debate. No podemos irnos al expediente y analizar. Muchas veces, se ha visto, el tribunal lo único que requiere para sentarse y para un juicio es un expediente con las copias de lo que se dictó como incorporación por lectura (juez H2).

Sin embargo, según lo observado en juicios realizados en los departamentos judiciales 1 y 2 la incorporación de prueba por lectura es una práctica usual. La razón de esto debemos buscarla en la incertidumbre que enfrentan las partes en el debate oral sobre el posible resultado. La primera opción de los actores judiciales para evitar dicha incertidumbre es llegar a un acuerdo de juicio abreviado. Así surge del relato del defensor oficial G:

…cuando hay una propuesta de un abreviado, nosotros lo hablamos, se lo explicamos a veces hasta a los familiares, y hacemos un acta interna en la defensoría donde se le explica y demás, simplemente para que le quede constancia de que nosotros buscamos […] la solución en el juicio abreviado, o que tuvo conocimiento de todo eso. Si bien la gente en ese sentido no demuestra en absoluto ingratitud con la defensa pública. No van a venir el día de mañana y van a decir “fuimos a juicio oral y me dieron 10 años”, “¿perdón?” yo le expliqué en su momento que el fiscal hizo una propuesta de cinco años y estaba la posibilidad de ir a juicio oral y que te declaren inocente o te condenen a igual a más o menos pena (defensor oficial G).

La incertidumbre del resultado no es sólo debida a la dificultad para pronosticar cómo interpretarán las pruebas y qué decisiones tomarán los jueces, sino también por la dificultad de lograr coordinar a testigos y peritos para que se presenten a la audiencia. Durante el trabajo de campo pude presenciar las dificultades que tenían fiscales y defensores tanto para lograr que se presenten los testigos a las audiencias de debate como para que su declaración coincidiera con la realizada previamente. Esto genera una prolongación imprevista de las audiencias de juicio, demandando a los funcionarios judiciales un día completo de trabajo incluso para casos relativamente sencillos:

Entra la jueza a la sala de audiencias y da comienzo al juicio oral […]

La jueza manda a llamar al primer testigo. Es un policía que actuó en el procedimiento durante el cual el imputado fue aprehendido.

Al retirarse el testigo, el secretario le informa a la jueza que otros dos policías (testigos del hecho) que debían declarar a continuación no han llegado. Son testigos comunes a las dos partes, es decir, tanto la fiscalía como la defensa han presentado su testimonio como prueba.

La jueza le pregunta a la defensora si es posible alterar el orden de las declaraciones y que declare el testigo ofrecido por la defensa. En ese mismo momento, la defensora decide desistir de dicho testigo argumentando que no ha logrado comunicarse con él para citarlo al juicio. La fiscal interrumpe para anunciar que ella también decide desistir de uno de sus testigos porque sabe que no va a presentarse. La jueza entonces pregunta qué testigos quedan. La defensa dice que queda uno de sus testigos que se ha presentado. La jueza da orden de llamar a dicha testigo.

Entra la testigo. […] Al retirarse la testigo, el secretario le señala a la jueza que no tienen más testigos. Solo falta declarar los dos policías que todavía no han llegado. La jueza decide dar un cuarto intermedio de 10 minutos y advierte que si no se presentan ordenará que los traigan con el auxilio de la fuerza pública.

20 minutos después sigo esperando en la sala de audiencia. Solo la defensora se ha quedado esperando sentada. Entonces vuelve a entrar la fiscal y le anuncia a la defensora que va traer a los testigos ausentes con la fuerza pública.

Defensora: “Ahh, no podés traerlos [a los testigos policías] si están trabajando”.’

Fiscal: “Y bueno, vendrán”.

Defensora: “No nos vamos más…”. Todos se van de la sala y acuerdan que se los llame una vez que los testigos lleguen.

Una hora y media más tarde vuelve la defensora a la sala de audiencias. Durante este tiempo no he visto a la jueza en la sala, pero la fiscal ha entrado y salido varias veces.

En ese momento entra la jueza y se sienta en el estrado. La defensora entonces se dirige a la fiscal y le dice: “Yo tengo otro juicio… ¿Y si incorporamos su testimonio por lectura?” La jueza interviene: “¿Son del acta?” [Su pregunta indica que quiere saber si los policías testigos son quienes redactaron el acta policial]

Defensora: “No van a decir nada nuevo”

La fiscal no responde, pero se muestra dubitativa. La jueza decide dictar un cuarto intermedio esperando que lleguen los testigos […]

Dos horas después, luego de que se realizara otro juicio en esa sala, vuelven a entrar la jueza, su secretario, la fiscal y la defensora y posteriormente el imputado y el público. La jueza reanuda rápidamente el juicio y hace llamar a los testigos que faltaba declarar. Entra el testigo. […] Al acabar su declaración me entero de que el otro testigo que faltaba declarar no ha venido.

La jueza consulta a las partes, porque es un testigo en común, qué desean hacer. La defensora acepta desistir de su testimonio. La fiscal no responde cuando se le consulta, demostrando así que no quiere desistir el testimonio del testigo. La jueza vuelve a preguntarle a la fiscal qué va a hacer con el testigo. Finalmente la fiscal, a regañadientes, decide desistir de su testimonio.

Esta incertidumbre es verdaderamente problemática para los actores judiciales. La fiscal de menores E explica que en varios casos tuvo que decidir en el último momento desistir de la realización del juicio por no contar con los testigos de los hechos:

…si fuese defensor […] sabría que el fiscal tiene que conseguir que vayan los testigos, tiene que sentarlos, llevar a juicio, tiene que probarlo que es dificilísimo. Yo tuve tres juicios que [fui] muy criticada cuando lo hice porque desistí de la acción. En uno la víctima no se presentó, tenía a un policía o algo así [se refiere a que sólo estaba un policía presente], yo para mí era imposible probarlo sin la víctima. [Eso] Me parecía a mí del análisis que hacía del caso. Yo no estoy dispuesta a traer una víctima por la fuerza pública, ahí desistí. En otro caso, era un hecho que para mí era difícil que lo pudiera probar, pero era un chico muy pesado. Era un hecho muy feo, robo con arma, donde dispararon adentro, donde después había abuso de arma porque disparaban los vecinos. Entonces yo, a pesar de que lo podía perder, no siempre voy con todas las de ganar, creía que tenía que ir a juicio a sentarme, a dar la pelea a ver si se podía probar, sin embargo no querían ir. Hablé todo con ellos, y lo que hice ahí fue que ellos me firmarán la notificación de ir a juicio y que ellos me pusieran de puño letra que ellos no querían ir a juicio y que querían que esa causa cerrara, con eso y en base a normativa legal, yo desistí del juicio. Un poco lo hago eso también por esto que decimos porque yo no muy soy amiga de decirle a mis superiores, de la prensa, de todo, de un robo con arma en concurso con abuso de armas que tuvo repercusión en un momento, de decirles ‘lo desistí’ y el chico quedó absuelto por desistimiento de la fiscal, “papá malo”, trato de hacerme el resguardo, pero igual tomo la decisión (fiscal de menores E).

De esta forma, llegar al juicio oral es una decisión cruzada por una constante valoración entre el acuerdo que ofrece la contraparte frente al riesgo que implica el debate oral. Como explica el defensor oficial G esta valoración varía conforme avanza el proceso y se va configurando el caso y las posibles estrategias a seguir:

…trato de adelantar la contradicción con los testimoniales, con los planteos, con una oposición. Sirve porque es una manera también de usar, filtrar y llegar [al juicio] […] Estas causas son causas graves para llegar a juicio. El criterio de la defensa pública es el de llevar a juicio lo que hay que llevar. Si no se puede gestionar un abreviado beneficioso, hacerlo [llevar el caso a juicio]. Porque uno sabe que el día de mañana un hecho grave con las víctimas, los jueces, ahí en la oralidad va a implicar una pena mucho más grave porque los hechos son de hace unos meses, ni los testigos desaparecen, ni se fueron, vienen al juicio, no hay muchas posibilidades en algún caso concreto de que cambien (defensor oficial G).

Para la defensa, llevar la causa a juicio suele ser la última opción. Según la jueza K2 la audiencia oral limita las estrategias defensivas porque los testimonios hacen evidente la culpabilidad o no del defendido:

…el tema es así: con el juicio oral es más difícil ser defensor, en el sentido de que primero estás más expuesto, y después que muchas veces uno no tiene nada para decir, ¿no? Es decir, existen muchísimos casos en que vos no tenés nada para decir, por ahí plasmarlo en una defensa escrita es una cosa y venir a poner la carita es otra. Es decir, es más difícil ser defensor en el juicio oral. Yo hice juicios orales como defensora porque en el anterior código los delitos de homicidio sí se resolvían en juicio oral. Entonces yo tenía la experiencia digamos del juicio oral del delito de homicidio, que en definitiva es el de ahora, y siempre el delito de homicidio es un delito, no te digo que ahora… pero siempre hay más para decir, ¿no? Por ahí en un robo con arma que agarraron ahí vos vas a un juicio oral y no tenés nada que decir… (juez K2)

Pero también es posible interpretar esto en el sentido que la mayoría de las causas son filtradas durante la etapa de garantías y la primera parte de la etapa de juicio, por lo cual sólo llegan a juicio casos difíciles desde el punto de vista de la defensa en los cuales los fiscales se han negado a ofrecer un acuerdo razonable para el imputado dado que existe una alta posibilidad de lograr condenarlo en un futuro juicio.

La gran mayoría de los juicios observados durante el trabajo de campo juzgaban delitos poco complejos durante los cuales el imputado había sido aprehendido en flagrancia, es decir, durante la realización del hecho o inmediatamente posterior a dicho hecho. En estos casos la defensa buscaba desarmar el argumento jurídico del fiscal demostrando la falta de concordancia entre el comportamiento y la figura delictual o atacar la validez de los procedimientos o de la prueba presentada. Pero en general son casos que se presentan como delitos evidentes frente al observador. De hecho, en la observación de juicios en los departamentos judiciales 1 y 2, pude comprobar que para los actores judiciales estos casos también se presentan como evidentes. Esto se transparenta en el fastidio que expresan cuando los juicios se demoran, ya sea por lo que consideran una argumentación excesiva de alguna de las partes, o porque las intervenciones de testigos o incluso del mismo imputado se extienden en cuestiones que los actores judiciales consideran que no son relevantes. La descripción de un juicio presenciado en el departamento judicial 1 ilustra esta actitud:

Luego de la lectura de los hechos descriptos en la acusación por el fiscal el presidente del tribunal se dirige a las partes y les consulta: “Hay prueba que se incorpora por lectura, ¿desean darle lectura?”

Tanto el fiscal como el defensor responden que no es necesario. Inmediatamente después, el fiscal anuncia que desiste de tres testigos. El defensor dice desistir también de esos tres testigos que eran “comunes”. El presidente entonces anuncia que se “incorpora por lectura” el testimonio de un policía ya que se encuentra enfermo y que se adjunta el certificado médico correspondiente.

Si bien hemos sostenido previamente que la racionalidad detrás de la incorporación de la prueba por lectura es evitar la incertidumbre de los testigos, es decir tanto de su posible ausencia como de un testimonio divergente respecto de lo declarado previamente, aquí se observa que estas declaraciones no se leen en voz alta. Esto implica que sólo los actores judiciales, con acceso al expediente, saben lo que el testigo ha declarado. Está práctica tiene como objetivo ahorrar tiempo pero evidencia que los actores judiciales no consideran relevante hacer accesible al público el fundamento de sus decisiones. Es cierto que en la mayoría de los juicios observados es muy limitada la concurrencia del público (de hecho en los juicios y audiencias que presencié (más de 60) salvo por mi presencia, el público aparentaba ser únicamente familiares y amigos del acusado). Al aparente desinterés del público en general por presenciar juicios se debe agregar las dificultades para hacerlo. Los juzgados y tribunales no suelen anunciar las fechas de las audiencias y debates, y como se describió previamente no se respetan los horarios programados. Por otra parte, los empleados del juzgado no están acostumbrados a que el público observé los juicios y ofrecen resistencias a quien desea hacerlo. Salvo en el departamento judicial 1, en todos los juzgados y tribunales de los otros dos departamentos judiciales observados tuve que identificarme ante los empleados judiciales y explicar la razón por la cual quería observar la audiencia o el debate. En todos los casos, los empleados previamente a autorizar mi presencia consultaron con los secretarios o incluso jueces. De esta forma, en la práctica los juicios no son orales ni públicos.

Continuando con mi descripción del juicio observado, se puede advertir cómo los jueces “limitan” las argumentaciones de las partes, a pesar de no existir norma o reglamentación que establezca dichos límites:

El juez pregunta a las partes si están listas para alegar. El defensor pide unos minutos para controlar el expediente y preparar los alegatos. Luego el fiscal también pide el expediente, y lo revisa durante pocos minutos. Menos de diez minutos después, tanto fiscal como defensor dicen estar listos para alegar. Comienza el fiscal, quien se explaya por algo más de quince minutos detallando su versión de los hechos y el encuadramiento legal de la acusación.

En su turno, el defensor en su alegato ataca la falta de pruebas para sostener la acusación. El defensor por su parte se explaya por más de cincuenta minutos, realizando una detallada argumentación sobre la inconsistencia de la prueba. Solicita la absolución de su defendido y en forma subsidiaría que sea declarado culpable de robo simple con el mínimo de pena de la escala penal.

Luego el presidente consulta al fiscal: “¿Va a hacer uso del derecho a réplica?”

El fiscal responde afirmativamente. A lo que con cierto fastidio el juez responde: “Bueno, pero todos vamos limitando el tiempo [de la exposición] entonces…”

El fiscal desarrolla entonces un alegato sobre la validez del testimonio de la víctima por veinte minutos. La repuesta del defensor toma otros veinte minutos y se focaliza en la falta de pruebas de la participación de su defendido.

El juez está visiblemente fastidiado. El presidente por último le pregunta al imputado si quiere decir algo antes de que el tribunal resuelva.

El imputado se autoincrimina y dice: “Estaba muy mal, había consumido y bebido de más… Nunca pensé en llegar a esto…”

El presidente entonces da por concluido el debate e indica que el tribunal se tomará un cuarto intermedio de media hora para dictar la sentencia.

Media hora más tarde todos vuelven a entrar en la sala. El presidente del tribunal anuncia que han llegado a un veredicto condenatorio.

De la descripción de este juicio surge la pobreza del debate que percibí en la mayoría de los juicios orales presenciados. El juicio se ofrece vacío porque ninguno de los actores judiciales, tanto los miembros del tribunal como fiscal y defensor, dudan de los hechos ni de que el acusado sea responsable. Esto en parte se debe a que como fue discutido previamente, sólo una porción mínima de los casos llega a juicio. Salvo casos muy complejos, que son excepcionales, los casos que llegan a juicio se deben a que las partes no han logrado llegar a un acuerdo de juicio abreviado previo. En el caso descripto el fiscal consideró la autoría fácil de probar y por lo tanto no ofreció a la defensa un acuerdo generoso. La defensa, por su parte, aun sabiendo que su cliente sería condenado por el tribunal prefirió ir a juicio porque intuyó que el tribunal (ante la poca gravedad del hecho) sentenciaría por el tiempo ya pasado en prisión preventiva. Esta estrategia se basa en una interpretación respecto de los requisitos del artículo 50 del Código Penal argentino para determinar cuando habría reincidencia. El mencionado artículo que establece que “habrá reincidencia siempre que quien [se] hubiera cumplido, total o parcialmente, pena privativa de libertad impuesta por un tribunal”. Por su parte, si el tiempo en prisión preventiva no es considerado pena sino medida de prevención; si al momento de ser condenado el detenido ha pasado igual o mayor tiempo en prisión preventiva que al que ha sido condenado, se considera compensado dicho tiempo. Sin embargo, legalmente no ha cumplido una condena durante ese tiempo (porque todavía era inocente legalmente). De esta forma, esa condena, no cumplida sino compensada, no puede ser tenida en cuenta en el caso de otra futura condena a los fines de ser declarado reincidente.

Esto también explica por qué el juez se fastidia con los alegatos de las partes y por qué la declaración final del imputado es casi escandalosa para los actores judiciales. El juez entiende que el juicio oral es un derecho del acusado, pero también sabe que ha sido usado por la defensa para evitar la posibilidad de ser declarado reincidente. Por lo tanto, los alegatos son superfluos, porque no hay margen para la discusión dentro de los parámetros aceptados para “probar” la verdad en la cultura judicial.

Es también por esto que la declaración del imputado es disruptiva, trae a la sala otro registro de verdad que pone en evidencia la distancia entre su “realidad” y la (re)construida en la narrativa judicial.

**La sentencia judicial**

Las audiencias de debate terminan con una sentencia judicial. La sentencia, si bien es dictada por un juez o un grupo de jueces, es el relato que resulta de la totalidad del proceso judicial. El juez D describe con profundidad filosófica lo que significa la sentencia para él:

Yo cuando hago una sentencia muestro modos de hacer, aunque no tenga todo el despliegue... muestro si tengo organizado mi sistema de pensamiento, muestro si me interesa la comunicación, muestro si me intereso yo mismo o me interesan las partes, muestro si me interesa que el ciudadano me entienda o no me entienda. Partiendo del resultado final yo puedo inferir de alguna manera el proceso (juez D).

Para el abogado defensor particular G2 el acto de lectura de la sentencia tiene gran valor simbólico porque no solo responsabiliza al imputado sino que también el juez asume la responsabilidad de su decisión. Su relato también evidencia que las prácticas cotidianas no siempre priorizan esta dimensión simbólica:

Yo cuando iba a los debates de un juez reconocido, éste volvía a formar el estrado, y la secretaria le leía y él le explicaba la sentencia al imputado, lo cual me parecía noble porque todavía que le estaban dando una condena, que por lo menos se la leyeran y que estuvieran presentes los que lo condenaron. Acá fue en un cuartito, cinco minutos y que pase el que sigue, o sea me pareció una falta de respeto al imputado, ya le estás dando doce años de condena, leéselo, he visto que en los casos más mediáticos por ahí lo hacen, cuando ellos quieren aparecer sí lo hacen (abogado defensor particular G2).

La sentencia implica no sólo una declaración sobre el caso puntual sino también una toma de posición que afectará las expectativas y por consiguiente las estrategias de fiscales y defensores para otros casos de allí en más. En algunos casos esta toma de posiciones respecto de la actividad de las partes es más directa, como comenta el juez A2:

Nosotros no decidimos la política criminal del Ministerio Público. Esta resolución es para un caso particular, yo no puedo pretender con eso que sea publicitado de manera tal que se extienda. En algún caso sí, la semana pasada, resolvimos uno y le remitimos copia al fiscal general que sí es el encargado de diseñar las políticas criminales del Ministerio Público, de ahí a que él lo haga es otra cosa (juez A2).

La flagrancia y su oralización del procedimiento han llevado a que las sentencias de juicio abreviado en la etapa de garantías sean realizadas de forma oral. Paulatinamente esta oralización del proceso, que nunca es completa porque siempre subsiste una reducida acta escrita de lo ocurrido, deja perplejos a los actores judiciales con más experiencia que temen posibles efectos no deseados como lo muestra el testimonio del juez D y la fiscal de casación T:

R: …no puede ser una sentencia oral. Esto me parece que sería una barbaridad.

P: ¿La sentencia oral?

R: Sí, tiene que haber argumentaciones y tiene que haber sentencias, para la recurrencia. La escritura no es moco de pavo, esto es la historia del hombre, la escritura hace al control (juez D).

Mirá, la flagrancia […] tiene algunas dificultades en cuanto a que […] es todo oral, cuando nos dieron el recurso en juicio de flagrancia del tribunal oral nos viene con el disco compacto que registra toda la audiencia y que registra la propia resolución. Es decir, cuando uno repasa las normas sobre la sentencia, que siempre decís la sentencia tiene que ser escrita, y ahí nos quedamos pensando y decimos “perdón, siempre que no sea una sentencia de flagrancia”. Porque ¿qué pasa? En el juicio de flagrancia tenés el acta que contiene una síntesis circunstanciada a lo mínimo de todo ocurrido y de la sentencia pero la fundamentación que es lo que da pie a la impugnación está en el disco compacto porque ha sido sustentada oralmente. Entonces, esto es una dificultad porque obviamente el derecho a recurso por manda constitucional y todo lo demás, existe y está bien que exista pero dificulta a la hora de nuestro caso que somos quienes, contradictores, tenemos que opinar sobre la procedencia o la viabilidad del recurso. Tenemos que escuchar el disco compacto y toda la audiencia porque la fundamentación de la sentencia está ahí y el acta del debate está ahí, o sea los elementos con los cuales podemos armar algún criterio tienen que ver con los jueces (fiscal de casación T).

Enfrentada a esta problemática que genera la sentencia oral, la jueza Ñ2 prefiere diferir el momento de su pronunciamiento y tomarse el tiempo para escribir la sentencia que luego oralizará pero que también quedará registrada por escrito en el acta del debate:

R: El tema de dictar resoluciones en el momento es muy positivo pero yo trato, por más que se grabe en audio, de hacer un acta bastante completa dentro de lo que puedo de la resolución. Me lleva un poquito más de tiempo y esfuerzo, pero ¿por qué? Porque después a mí me apelan y yo no puedo ir al juez de Cámara y decir, no pero en realidad yo dije esto por...

P: ¿No escuchan el audio? ¿No mandan el audio?

R: Sí, pero, es decir, a vos te plantean una nulidad, te plantean esto... improvisás todos los argumentos, ¿cómo hago yo para citar jurisprudencia en el momento? […] En algunas cosas tenés que ser muy preciso, entonces me tomo un cuarto intermedio, busco, lo armo de manera más sólida, ¿por qué? Porque después te lo recurren y tu argumento quedo ahí, no tenés forma de aclarar por qué vos pensaste eso (jueza Ñ2).

Frente a estos resquemores con la sentencia oral, el fiscal N y el juez J consideran que la sentencia escrita genera peores vicios, en particular acaba demorando al proceso. Argumentan que la cultura judicial local lleva a que los jueces busquen lucir su conocimiento jurídico en la sentencia, perdiendo de vista el objetivo de dar una solución al conflicto. El proceso es un círculo vicioso en el que cada actor judicial busca demostrar su conocimiento provocando una inflación en las resoluciones judiciales que culmina con una desmesurada sentencia:

… todo se logra únicamente en la oralidad, si vos manejás esto por escrito: corto y pego 200 fojas mi primer recurso, 250 el segundo, 300 el tercero porque cada vez le agrego cosas nuevas y no le saco nada de lo que tengo. Entonces el relator va leyendo las negritas o va leyendo los inicios de cada ítem para llevarse una idea. Nadie lo lee pero como sabe que algo hay que decir, tiene sus propios formularios donde agrega 300 fojas a la sentencia diciendo qué sé yo... y nadie lee nada, es todo pérdida de tiempo y burocracia que se justifica a sí misma... si vos tenés una audiencia con un juez que viene en blanco a escuchar a las partes a partir de ahí se acabaron los relatores. [Se] Necesita una sala de audiencia y escuchar eficientemente a las partes (fiscal N).

Todo el proceso lleva más tiempo del necesario a fiscales, defensores y jueces provocando demora judicial, sin que esto redunde en una resolución judicial más justa:

Si vos tenés cinco días para resolver y lo hacés en diez, no tenés motivos para justificarme que tu resolución que hiciste en diez días fue mucho mejor que la que se podía hacer en cinco. El onanismo intelectual contribuye a la demora. La sentencia linda te lleva más tiempo de hacer que la sentencia justa (juez J).

Detrás de estas dos posturas opuestas, la de los promotores y retractores del dictado inmediato de sentencias orales, se desarrolla el profundo cambio que los discursos y reformas en pos de erradicar la demora están provocando en la cultura judicial local. Para los actores judiciales más tradicionales como la jueza Ñ2 la perfección técnica de la sentencia legitima el poder de castigar del Estado. Y justamente en pos de dicha perfección técnica la sentencia debe ser fruto de una reflexión no apresurada, expresada en forma escrita para explicitar sus fundamentos y que sea posible en su caso recurrirla frente a un tribunal superior si no hubiera alcanzado esa perfección. En cambio, desde la perspectiva de los discursos reformistas contemporáneos, expresados por las posturas del fiscal N y del juez J, sin desconocer la importancia de la calidad técnica de la sentencia, lo que legitima el poder punitivo del Estado es que la sentencia sea dictada lo más pronto posible y en los términos más claros. Es decir, el castigo se legitima si el condenado, pero también la víctima y el público en general, consideran ese castigo justo, y para esto la sentencia debe llegar a tiempo respecto de la expectativa temporal de ellos. El peligro es que esta búsqueda de acelerar los procesos, incluso el dictado de la sentencia, termine reduciendo la reflexión judicial, permitiendo arbitrariedades, acabando por ser simplemente la legitimación de las actuaciones previas policiales.

## Conclusiones

La demora judicial en la administración de justicia penal ocupó un lugar privilegiado en los discursos reformistas. A su vez, la demora judicial permitió al discurso gubernamental canalizar tanto los reclamos por falta de seguridad como por violaciones de los DDHH de los detenidos. Para sostener esta centralidad de la demora judicial el discurso gubernamental se nutrió de los discursos técnicos y sus programas de reforma. A su vez, los discursos gubernamentales le dieron notoriedad a los discursos técnicos sobre los que se apoyaron. Como contrapartida de esta relevancia que recibieron en los discursos gubernamentales, el enfoque de los discursos técnicos se distanció de las críticas más radicales a la administración de justicia penal orientándose a ofrecer cambios moderados políticamente posibles. Este pragmatismo político les permitió aunar el apoyo de sectores de todo el arco ideológico a sus programas de reforma judicial.

El consenso construido alrededor de la problemática de la demora judicial permitió promover e implementar profundos cambios en la administración de la justicia penal que llevaron a imponer progresivamente una forma local de gerencialismo.

La soluciones propuestas buscaban implementar un sistema acusatorio y oral, modificar la estructura organizacional para dotarla de flexibilidad, reorganizar los recursos humanos y materiales para un uso más racional de ellos y reconocer la incapacidad del Estado de realizar juicios orales en todos los casos a través de la promoción de una serie de mecanismos de solución alternativa (juicio abreviado, mediación penal, suspensión del juicio a prueba, archivo de la causa).

Las observaciones de las prácticas judiciales en la etapa de juicio confirman que a pesar del rol protagónico que los discursos reformistas y gubernamentales otorgaron al juicio oral y público en la práctica es excepcional. Los diversos mecanismos de solución alternativa introducidos con la promesa de aliviar la carga de trabajo terminaron relegando el juicio oral a un papel absolutamente simbólico.

Lo interesante es que en las entrevistas, a pesar de reconocer esta circunstancia, los actores judiciales constantemente remiten al juicio como el momento culminante del proceso penal. Los actores judiciales aceptan mecanismos polémicos tales como el juicio abreviado en tanto exista la posibilidad del juicio oral, esa instancia de confrontación donde surge la verdad que legitima el castigo. Sin embargo, estos mismos actores judiciales que reivindican el juicio oral y público son quienes lo evitan. Desde la perspectiva economicista que introduce la lógica de la gestión, el juicio oral es demasiado costoso y ofrece poca certidumbre. Por esta razón el juicio queda relegado a ser la última solución posible cuando no se haya logrado una negociación en las etapas previas. El juicio oral se presenta como costoso para los actores judiciales ya que insume una gran cantidad de tiempo, no sólo en los días del debate propiamente dicho, sino también los de preparación previa al debate y los posteriores en caso de tener que preparar un recurso frente a una sentencia contraria.

Pero además el juicio oral expone a los actores a la incertidumbre del resultado del caso. Esta incertidumbre no sólo es producto de la imposibilidad de predecir la decisión de los jueces, sino también de cierta imprevisibilidad de los testigos, tanto en su presencia o ausencia, como en lo que finalmente declaren. Durante los juicios observados se repitió constantemente la práctica de solicitar la incorporación de prueba por lectura. Esta práctica es criticada por los discursos técnicos y los propios entrevistados expresaron su rechazo. Sin embargo, de la observación surge que la razón de esta práctica es justamente la posibilidad que ofrece a los actores judiciales de reducir la incertidumbre respecto de los testimonios en el juicio oral. A su vez, la incorporación de la prueba por lectura consolida el expediente judicial, una tecnología que los programas de reforma buscaron eliminar.

Sin embargo, el juicio oral y el sistema adversarial sí han traído un profundo cambio en la dinámica interna de la institución. Han abierto la puerta para el desarrollo de una defensa más activa, y han permitido que los jueces, tanto en la instancia de juicio como en la previa, tengan cierta distancia respecto del aparato policial y su lógica punitiva. Sería un error desconocer los profundos cambios en las prácticas diarias de la institución judicial.

A pesar de esto, queda que el juicio oral y público no erradicó, ni podría haberlo hecho, la demora judicial, dados su complejidad y costos. Más discutible es si ha traído una mayor democratización de la institución judicial. Su uso es excepcional y la discusión probatoria en los debates es muy limitada, al punto que se aceptan por validas declaraciones testimoniales tomadas por el fiscal meses e incluso años atrás. Puede que la implementación del juicio por jurados fuerce una mayor transparencia en el desarrollo de las audiencias. Por supuesto que esto no afectará el tipo de casos que la policía selecciona, ni la calidad de la investigación que lleva a cabo, cuestiones que deben ser enfrentadas si lo que se busca es verdaderamente el respeto de los DDHH.

## Referencias

Binder, A. M. (2003). La fuerza de la oralidad. En P. Cóppola (ed.), *La reforma procesal penal en Córdoba*. Córdoba: Alveroni Ediciones.

Binder, A. M. (2007). La cultura jurídica entre la tradición y la innovación. En L. Pásara (ed.), *Los actores de la justicia Latinoamericana* (pp. 21-40). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Casanovas, J. (2001, 7 de mayo). A Ruckauf no le dejan aplicar su política de seguridad. *Clarín*. Recuperado de <http://edant.clarin.com/diario/2001/05/07/o-02101.htm>.

Ciocchini, P. (2013). El adelantamiento del juicio: los mecanismos de solución alternativa y las audiencias orales tempranas. *Revista de Derecho Penal y Procesal Penal,* (9), 1775-1795.

Clariá Olmedo, J. A. (1998). *Derecho Procesal Penal* (actualizado por Jorge Eduardo Vázquez Rossi, ed.), vol. 1. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores.

Convocarían a una consulta popular para definir la reforma penal. (2007, 1 marzo). *El Día*. Recuperado de <http://www.eldia.com.ar/catalogo/20070301/20070301193929.htm>.

De Lázzari, E. (1997). El Ministerio Público Fiscal y la reforma procesal. En C. A. Chiara Díaz (ed.), *Código procesal penal de la provincia de Buenos Aires comentado* (pp. 55-74). Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores.

Delfino, H. M. (1996, 21 de abril). Las cárceles bonaerenses siguen siendo un polvorín. *La Nación*. Recuperado de <http://www.lanacion.com.ar/175059-las-carceles-bonaerenses-siguen-siendo-un-polvorin>.

Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación (1991a). 30-07-91. Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación.

Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación (1991b). 25-07-91. Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación.

Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación (1993). 02-06-93. Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación.

Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación (1994). 26-10-94. Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación.

Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación (1990a). 05-09-90. Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación.

Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación (1990b). 29-08-90. Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación.

Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación (1993). 29-12-93. Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación.

Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación (1994). 01-09-94. Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación.

Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires (1996). 07-11-96. La Plata.

Dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Derechos y Garantías de la Cámara de Senadores de la Nación (1994). 13-04-94. Buenos Aires: La Ley Online.

Divide a la Legislatura la idea de favorecer las excarcelaciones. (2002, 24 de junio). *El Día*. Recuperado de <http://www.eldia.com.ar/catalogo1/20020624/laciudad7.asp>.

Duce, M. (2005). Presentación. En AA.VV., *Reformas procesales penales en América Latina: discusiones locales,* vol. II (pp. 9-12). Santiago: Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

El dos por uno dejaría libres a 8 mil presos. (2000, 25 de octubre). *El Día – Edición Internet*. Recuperado de <http://www.eldia.com.ar/ediciones/20001025/titular0.html>.

Espada, M., & Irisarri, C. A. (1998). *Política criminal en el Estado de Derecho,* vol. 1. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas.

Evolución del presupuesto – Provincia de Buenos Aires (2011). Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires – Suprema Corte de Justicia.

Frank, J. L. (1986). *Sistema acusatorio criminal y juicio oral*. Buenos Aires: Lerner Editores Asociados.

Fucito, F. (1984). *La necesidad de un enfoque sociológico-jurídico para el estudio de las organizaciones.* (Doctorado). La Plata: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad Nacional de La Plata. Inédito.

*Fundamentos de la ley nº 11.922* (1996). Recuperado de La Plata: <http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/f-11922.html>.

Hazán, L., & Iud, A. (2009). Informe de evaluación del proceso de fortalecimiento del sistema acusatorio en la Provincia de Buenos Aires. En AA.VV., *Primer encuentro nacional Redex Argentina* (pp. 161-235). Córdoba: Advocatus.

Hazán, L., & Riego, C. (2007). La oralidad en las etapas previas al juicio: la experiencia de Mar del Plata. En C. Riego (ed.), *Reformas procesales en América Latina: resultados del Proyecto de Seguimiento, IV etapa* (pp. 255-294). Santiago: Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

Heydebrand, W. V. (1977). The Context of Public Bureaucracies: An Organizational Analysis of Federal District Courts. *Law & Society Review,* 11, 759-820.

Kostenwein, E. (2015). Prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires. *Nova Criminis,* 9, 149-180.

La Corte estudia la situación carcelaria (2005, 15 de abril). *La Nación.* Recuperado de <http://www.lanacion.com.ar/696241-la-corte-estudia-la-situacion-carcelaria>.

Langbein, J. H. (1992). On the Myth of Written Constitutions: The Disappearance of Criminal Jury Trial. *Harvard Journal of Law & Public Policy,* 15(1), 119-127.

Langer, M. (2007). Revolution in Latin American Criminal Procedure: Diffusion of Legal Ideas from the Periphery. *American Journal of Comparative Law,* 55, 617-676.

Los siete puntos del petitorio (2004, 1 de abril). *Clarín – Edición digital*. Recuperado de <http://edant.clarin.com/diario/2004/04/01/um/m-734983.htm>.

Maier, J. B. J., & Binder, A. M. (1989). Exposición de motivos. Antreproyecto de ley orgánica para la Justicia Penal y el Ministerio Público, *Symposium internacional sobre la transformación de la justicia penal en la República Argentina,* t. II (pp. 275-282). Buenos Aires: Talleres Gráficos de la Dirección Nacional del Registro Oficial.

Mejoró pero aún es crítica la situación de los presos (2007, 2 de noviembre). *El Día*. Recuperado de <http://www.eldia.com.ar/catalogo/20071102/laprovincia15.htm>.

Morello, A. M. (1983). Eficacia y controles en el funcionamiento del servicio de la justicia. En *II Encuentro Panamericano y XII Congreso Argentino de Derecho Procesal. Ponencias generales* (pp. 109-132). Rosario: Editorial Rubinzal-Culzoni.

Morosi, P. (2003, 12 de julio). Los jueces de Paz, en causas penales. *La Nación*. Recuperado de <http://www.lanacion.com.ar/510864-los-jueces-de-paz-en-causas-penales>.

Oliva, L. (2000, 19 de noviembre). La ley que terminó con la Justicia. *La Nación*. Recuperado de <http://www.lanacion.com.ar/210993-la-ley-que-termino-con-la-justicia>.

Pérez Perdomo, R. (1998). El Código Orgánico Procesal Penal y el funcionamiento de la administración de justicia. *Capítulo Criminológico,* 26(1), 19-43.

Piovani, J. I. (2007). La entrevista en profundidad. En A. Marradi, N. Archenti, & J. I. Piovani (eds.), *Metodología de las ciencias sociales* (pp. 215-225). Buenos Aires: Emecé Editores.

Procuración General (2011a). *Fuero penal: IPP iniciadas por departamento judicial año 2009*. La Plata. Recuperado de [http://www.mPBA.gov.ar/web/estadisticas.php](http://www.mpba.gov.ar/web/estadisticas.php).

Procuración General (2011b). *Fuero penal: IPP iniciadas por departamento judicial año 2010*. La Plata. Recuperado de [http://www.mPBA.gov.ar/web/estadisticas.php](http://www.mpba.gov.ar/web/estadisticas.php).

Riego, C. (2010). Una nueva agenda para la prisión preventiva. *Sistemas judiciales,* (14), 6-11.

Sagasti, R. (2004, 3 de abril). La seguridad en estado de emergencia. *La Nación*. Recuperado de <http://www.lanacion.com.ar/589154-la-seguridad-en-estado-de-emergencia>.

Sagasti, R. (2007, 10 de octubre). Autocrítica de Solá por la inseguridad. *La Nación*. Recuperado de <http://www.lanacion.com.ar/951751-autocritica-de-sola-por-la-inseguridad>.

SCBA (n.d.). Estadísticas. Recuperado de <http://www.scba.gov.ar/informacion/estadisticas.asp>.

Solá defendió ayer dos polémicas leyes (2007, 1 de febrero). *Ámbito Financiero*. Recuperado de <http://www.ambito.com/noticia.asp?id=360496>.

Solá pide que se haga un congreso de magistrados (2005, 7 de mayo). *La Nación*. Recuperado de <http://www.lanacion.com.ar/702201-sola-pide-que-se-haga-un-congreso-de-magistrados>.

Struensee, E., & Maier, J. B. J. (2000). Introducción. En J. B. J. Maier, K. Ambos, & J. Woischnik (eds.), *Las reformas procesales penales en América Latina*. Buenos Aires: Ad-Hoc.

Tironeos en el Gobierno por alojamiento de presos (2004, 29 de octubre). *El Día*. Recuperado de <http://www.eldia.com.ar/ediciones/20041029/elpais9.asp>.

Valles, M. S. (2007). *Entrevistas cualitativas*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vargas Viancos, J. E. (2005). Presentación. En AA.VV., *Reformas procesales penales en América Latina: resultados del proyecto de seguimiento* (pp. 7-10). Santiago: Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

Vuelven a proponer la excarcelación de presos por delitos “menores” (2002, 20 de junio). *El Día*. Recuperado de <http://www.eldia.com.ar/catalogo1/20020620/policiales1.asp>.

Zaffaroni, E. R., Slokar, A., & Alagia, A. (2003). *Derecho Penal: parte general* (2a ed.). Buenos Aires: Ediar.

1. Langer (2007: 618) explica que, en América Latina, los políticos y reformistas han descrito como “un avance hacia sistemas acusatorios”: la introducción de juicios orales públicos, la introducción y/o el fortalecimiento de la oficina del fiscal y la decisión de poner al fiscal, en lugar de al juez, a cargo de la investigación preliminar, la concesión de más derechos en la fase preliminar a los demandados, la introducción del principio de discreción fiscal, la posibilidad de los juicios abreviados y otros mecanismos alternativos de solución de controversias, y la ampliación del rol de la víctima y su protección durante el proceso penal. [↑](#footnote-ref-1)
2. Las palabras del diputado Gentile muestran la intensidad de la atención sobre la demora judicial como el problema clave de la administración de justicia penal y sobre el nuevo CPPN como la solución para la demora: “daría la impresión de que la pretensión del nuevo código es lograr una justicia que actúe más aceleradamente, como si esto solo significara una mejor justicia” (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación*, 1991a: 1676). [↑](#footnote-ref-2)
3. Ya en 1986 el presidente Alfonsín expresaba en un discurso a la nación que: “la reforma de la administración de justicia, debería estar dirigida a hacer más eficaz, más ágil y más accesible a todos los sectores de la población, la trascendente tarea de dirimir judicialmente los conflictos sociales e individuales.Para ello, parece conveniente estudiar la posibilidad de establecer el proceso oral, en el orden nacional, sobre todo en el ámbito penal, de modo de favorecer la publicidad, inmediación y rapidez de los procesos…” (Diario *Clarín*, en adelante DC 16 abril 1986 en Frank (1986: 13-14)).

   La lectura de las actas del debate en el Congreso Nacional en 1990 y 1991 muestra que el apoyo a los juicios orales y públicos con respecto a los procedimientos escritos era casi unánime entre los legisladores. Cabe destacar que el único legislador en el debate que expresó su rechazo a los juicios orales públicos admitió que, igualmente, votaría a favor de la reforma, porque su partido político había decidido hacerlo (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación*, 1991b: 1647). [↑](#footnote-ref-3)
4. El senador Benítez fue aún más allá y pretendió sostener “científicamente” este argumento. Así, comparó el porcentaje de presos sin sentencia en las jurisdicciones con un procedimiento penal inquisitivo, con el de las jurisdicciones con sistemas acusatorios. Según él, mientras que en el primer grupo un promedio del 69% de la población carcelaria son detenidos en espera de su juicio; en el segundo grupo, el porcentaje es mucho menor. Para sostener sus afirmaciones nombró los ejemplos de Guyana con el 37%, Inglaterra con el 16% y Canadá con el 13% (*Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación*, 1990b: 2530). El diputado López Arias siguió también esta línea de razonamiento y comparó la jurisdicción federal bajo el régimen del viejo CPPN inquisitivo con la jurisdicción de Córdoba en la que ya se había implementado un código acusatorio (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación*, 1991b: 1624).

   Cabe destacar que el único legislador que se pronunció en contra de los juicios orales públicos también recurrió a una comparación estadística entre las jurisdicciones, para sostener su posición en contra de la reforma del CPPN. Comparó la cantidad de sentencias de la jurisdicción de Santa Fe, que posee procedimientos escritos, con la de Córdoba, indicando que la primera tenía 2.000 sentencias, mientras que la otra tenía 600 (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación*, 1991a: 1656). [↑](#footnote-ref-4)
5. Me refiero al artículo 7.5 de la CADH. [↑](#footnote-ref-5)
6. El diputado López de Zavalía expresó su preocupación sobre si el nuevo CPPN violaría la CADH, precisamente por la introducción de los juicios orales y públicos. Según él, el juicio oral y público no permite, en principio, la apelación de la sentencia dictada en razón de la valoración de la evidencia del caso. Eso se debe a que las pruebas deben ser evaluadas por el juez en la audiencia pública y, por lo tanto, no se puede replicar esa producción de la prueba. Así, con la introducción de los juicios orales públicos la disposición de la CADH reconoce como derecho del imputado la posibilidad de apelar la sentencia condenatoria se vería severamente restringida (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación*, 1991b: 1648). La preocupación del diputado se concretizó en el caso de la reforma del CPP que también introdujo los juicios orales públicos. A fin de adaptar su régimen de apelación a las normas de la CADH hubo que realizar una segunda reforma ampliando el régimen de apelación. Pero esta reforma resultó en una multiplicidad de posibles recursos de apelación y la persistencia del expediente escrito, necesario para permitir el examen del proceso y la sentencia por tribunales superiores. [↑](#footnote-ref-6)
7. Una minoría de legisladores planteó dudas sobre la eficacia de la administración de justicia penal para reducir la tasa de criminalidad incluso si el nuevo CPPN incrementara su eficiencia (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,* 1991a: 1664, 1667). Otros grupo de legisladores, sin oponerse al argumento mayoritario que asociaba una mayor eficacia de la administración de justicia penal con la reducción de la tasa de criminalidad, sí se opuso a la idea de que la mera reforma del CPPN sería suficiente para hacer más eficiente la administración de justicia penal (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,* 1991b: 1645). [↑](#footnote-ref-7)
8. De hecho, el Gobierno declaró en los considerandos preliminares de la ley que introdujo la suspensión del juicio a prueba, que se basaba en la *diversion* y no en la *probation* (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,* 1993: 1289). La diferencia entre la *probation* y la *diversion* es que mientras que en la *probation* la sentencia se suspende, en la *diversion*, el proceso penal en sí se suspende antes de llegar al juicio (*Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación,* 1993: 1289). Sin embargo, en Argentina, la suspensión del juicio a prueba ha sido conocida como *probation*. [↑](#footnote-ref-8)
9. La ley 24.390 se conoce popularmente como la ley del “dos por uno” por la forma en que cuenta doble los días de prisión preventiva. La ley reformó el CP estableciendo que los días cumplidos en prisión preventiva deben contar doble, en caso de una eventual condena, cuando los detenidos ya han cumplido dos años de prisión preventiva (art. 7° ley 24.390). [↑](#footnote-ref-9)
10. Esta primera emergencia del discurso de la gestión en el discurso gubernamental de la reforma judicial sólo iba a ser retomado por el discurso gubernamental bonaerense diez años más tarde. [↑](#footnote-ref-10)
11. Las investigaciones del CEJA se encuentran publicadas en su sitio web: [www.cejamericas.org](http://www.cejamericas.org). [↑](#footnote-ref-11)
12. Por ejemplo Fucito en un trabajo de 1982 explica la demora judicial como consecuencia de la complejidad burocrática de la administración de justicia. Fucito considera que el tamaño de la estructura de la organización judicial y la proliferación de niveles por los cuales deben pasar las comunicaciones para llegar al objetivo propuesto generan demora. El autor proponía la disminución de estos niveles para lograr acelerar el proceso judicial (Fucito, 1984, p. 119). Morello, jurista reconocido, citando el trabajo de Fucito de 1982 señalaba la importancia del elemento organizacional para resolver el problema de la duración excesiva de los procesos civiles. En aquel momento Morello reclamaba un cambio de metodología para el análisis de los problemas que sin dejar de lado la dogmática jurídico-procesal profundizará en el análisis del funcionamiento concreto de la justicia y buscará soluciones prácticas (Morello, 1983, p. 124). [↑](#footnote-ref-12)
13. En el anexo se encuentra el guion utilizado en la entrevista. [↑](#footnote-ref-13)
14. Esto no es particular del sistema judicial bonaerense sino más bien la regla. A comienzos de los noventa Langbein ya había denunciado que el sistema procesal de Estados Unidos, de carácter adversarial/acusatorio, que sirvió de modelo al sistema procesal bonaerense, termina restringiendo a una minoría simbólica los casos que se juzgan por juicio oral (Langbein, 1992). En su lugar, los casos son resueltos mediante la negociación entre fiscal y defensor de la condena utilizando el instituto del *plea bargaining* del cual deriva nuestro juicio abreviado (Langbein, 1992: 121). Peréz Perdomo ahonda aún más citando un estudio que indica que en Estados Unidos sólo el 14% del total de los casos con acusados detenidos llegan a juicio (Pérez Perdomo, 1998: 33). La antigüedad de estos datos evidencia que era largamente conocido antes de las reformas que la inclusión de mecanismos de negociación al estilo del *plea barganing* resulta en una alta restricción del juicio oral y público. [↑](#footnote-ref-14)